

Noviembre 27 de 1946

58ª REUNION — Continuación de la 12ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señor Héctor Sustaita Seeber

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

DIPUTADOS PRESENTES:			
Albrieu, Oscar E.	Dri, Roberto	Pasquini, José P. D.	Zanoni, Pedro P.
Alvarez, Néstor	Errecart, Juan A.	Pastor, Reynaldo A.	Zibny, Mario
Alvarez Pereyra, Manuel	Fajre, José Benito	Peña Guzmán, Solano	AUSENTES CON LICENCIA:
Alvarez Pérez, Vicente	Fernández, Baltasar S.	Pérez de la Torre, Horacio	Andreotti, Antonio
Allub, Rosendo	Fernández, Hernán S.	Petruzzi, Miguel	Baulina, Angel V.
Aráoz, Ricardo E.	Ferrando, Manuel P.	Pirani, Antonio S.	Beretta, Eduardo
Arévalo Cabeza, Jabel	Ferrer, Modesto	Pomar, Gregorio	Colom, Eduardo
Argaña, José M.	Fregossi, Luis J.	Ponce, Angel L.	Cuminetti Correa, Alcides D.
Arias, José	Frondizi, Arturo	Pontieri, Silverio	Gercke, Carlos Gustavo
Ayala López Torres, Francisco	Garaguso, Bernardino Hipólito	Pueyrredón Horacio Honorio	Jofre, Hernán R.
Ayerbe, Lázaro Balbino	Garay, Marcelino S.	Raña, Eduardo Antonio	Marotta, José
Bagnasco, Vicente	García, Manuel	Ravignani, Emilio	Polizzi, Juan
Balbin, Ricardo	García Quiroga, Alejandro	Repetto, Agustín	Ricagno, Roberto
Barreiro, Carmelo	Giménez Vargas, Francisco	Reyes, Cipriano	Rodríguez, Manuel
Benítez, Antonio J.	González Funes, Tomás	Reynés, Leandro R.	Zara, Edmundo Leopoldo
Bertini, Amadeo	Guardo, Ricardo C.	Rodríguez de la Torre, Raúl	AUSENTES CON AVISO:
Bonazzola, Romeo E.	Guillot, César Joaquín	Rojas, Absalón	Alvarez, Juan Daniel
Boullosa, Emilio M.	Klix López, Guillermo	Rojas, Nerio	Alvarez Voces, Enrique
Braga, Juan Carlos	Lareo, Ricardo	Rossi, José	Brugnerotto, Juan N. D.
Busaniche, Julio J.	Lasciar, Guillermo F.	Rougier, Valerio S.	Curehod, Amado J.
Bustos Fierro, Raúl	Lencinas, José R.	Rubino Sidney Nicolás	Delleplane, Luis
Cámara, Guillermo F.	Letamendi, Balbino (h.)	Rumbo, Eduardo I.	Dufau, Juan Adolfo
Cámpora, Héctor J.	Liceaga, Félix J.	Sammartino, Ernesto E.	Graña Etcheverry, Manuel
Camus, Eloy F.	López Serrot, Oscar	San Millán, Ricardo Antonio	Ianspolsky, Angel
Candiotti, Alberto M.	Mae Kay, Luis R.	Santander, Silvano	Kees, Gaspar
Casas Nobrega, Armando	Mañeri, D. Jacinto	Saravia, Teodoro S.	Mendiundo, F. Daniel
Cleve, Ernesto	Malecek, José Enrique	Sarmiento, Manuel	Rodríguez, Nerio M.
Cooke, John William	Mántaras, Manuel J.	Sobral, Antonio	Sarraute, José Roberto
Córdova, J. Salvador	Marítegui, Angel S.	Solana, Emilio	Sejeda, Ramón Washington
Corvalán, Luciano R.	Martínez Guierro, Guillermo	Sorgentini, Mario Alberto	Valdez, Celestino
Cufre, Orlando H.	Martínez Luque, Enrique	Sustaita Seeber, Héctor	Vischi, Albino
Decker, Rodolfo A.	Messina, Humberto	Tesorieri, José V.	AUSENTES SIN AVISO:
Degreef, Juan Ramón	Montes de Oca, Carlos	Tommasei, Victorio M.	Antille, Diógenes C.
De la Torre, Juan	Montiel, Alcides F.	Toro, Ricardo	Calegno, Alfredo D.
Del Carril, Emilio Donato	Moreno, José Luis	Udrapilleta, Oscar C.	Casal, Raúl M.
Del Mazo, Gabriel	Masset, Hurraspe, Mario	Vannasco, Julio A.	Galvagni, Saverio M.
Díaz Colodrero, Justo	Mujica, Rodolfo	Velloso Colombres, Manuel F.	Noriega, Juan J.
Díaz de Vivar, Joaquín	Obeld, Leonardo	Vergara, Amando	
Díaz, Manuel M.	Orozco, Modesto V.	Villafañe, José María	
	Osinalde, Rafael	Visca, José Emilio	
	Otonello, Benito J.		
	Palacio, Ernesto		

SUMARIO

1.—Indicación del señor diputado Cámpora sobre trámite de asuntos entrados.

2.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo: inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley de subsidio para la celebración del Primer Congreso Americano del Transporte Automotor.

II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: inclusión en las sesiones extraordinarias, de un proyecto de ley sobre aumento de retribuciones a personal de establecimientos de enseñanza incluidos en el anexo E del presupuesto general de la Nación.

III.—Mensaje del Poder Ejecutivo referente a exclusión en la ratificación legislativa de decretos del Poder Ejecutivo, del decreto 13.757 de 1946, sobre devolución de sumas

descontadas al personal de las reparticiones autárquicas.

IV.—Comunicaciones del Honorable Senado.

V.—Comunicaciones oficiales.

VI.—Comunicación de comisión.

VII.—Peticiónes particulares.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Pueyrredón: incorporación al régimen de las leyes para obras públicas 12.576 y 12.815, de un crédito para obras e instalaciones de la Asistencia Pública de Bernal, provincia de Buenos Aires.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Díaz: subsidio al Club Atlético San Lorenzo, de Tostado, provincia de Santa Fe.

X.—Proyecto de ley del señor diputado Mántaras y otros, sobre acumulación de sueldos de funcionarios y empleados del Estado, civiles o de las fuerzas armadas.

XI.—Proyecto de ley del señor diputado Díaz: incorporación al régimen de las leyes de obras públicas 12.576 y 12.815, de créditos para estudios, proyectos y construcción de obras en la provincia de Santa Fe.

XII.—Proyecto de ley del señor diputado Tesorieri: subsidios a la Asociación Cultural Florencio Sánchez, de la Capital Federal.

XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Sobral: subsidios al Círculo de la Prensa de Córdoba, de la ciudad de Córdoba.

XIV.—Proyecto de ley del señor diputado Sarraute, sobre modificaciones a la ley 9.688, de accidentes de trabajo.

XV.—Proyecto de ley del señor diputado Arévalo Cabeza: subsidio a la Sociedad Femenil de Socorros Mutuos, de la provincia de San Juan.

XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Arévalo Cabeza: subsidio al Colegio Nuestra Señora del Tránsito, de la provincia de San Juan.

XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Liceaga: escalas de bonificaciones mensuales para personal del Estado, jubilaño de acuerdo con disposiciones actualmente en vigor.

XVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Arévalo Cabeza: subsidio al Colegio Don Bosco, de la provincia de San Juan.

XIX.—Proyecto de ley del señor diputado Arévalo Cabeza: aumento de subvención a la Universidad Popular de San Juan.

XX.—Proyecto de ley del señor diputado Arévalo Cabeza, por el que se acuerda una subvención para la publicación del libro

Antecedentes de la minería y de su legislación en la Argentina, de don Natalio Abel Vadell.

XXI.—Proyecto de resolución del señor diputado Bonazzola y otros: pedido de informes al Poder Ejecutivo relacionados con la producción, industrialización y comercio del sebo.

3.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ley, en revisión, sobre ratificación del decreto que instituye el Estatuto Legal del Periodista. Se sanciona.

4.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre crédito extraordinario destinado a atender el costo de la aplicación de escalafones ferroviarios para personal de empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado.

—En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de noviembre de 1946, siendo las 16 y 20:

1

INDICACION

Sr. Presidente (Guardo). — Continúa la sesión. Corresponde continuar la consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes, en el proyecto de ley, en revisión, sobre Estatuto Legal del Periodista.

Sr. Cámpora. — Pido la palabra.

Voy a proponer que la Honorable Cámara autorice a la Presidencia a girar a las comisiones los asuntos entrados que se han venido acumulando durante estas sesiones en que la Cámara retomaba su labor después de haber pasado a cuarto intermedio.

Sr. Pastor. — Entiendo que los proyectos de resolución y de declaración no deben ser girados, sino que deben permanecer en la mesa para ser oportunamente informados por sus autores.

Sr. Presidente (Guardo). — Desde luego, señor diputado, así lo entiende la Presidencia.

Sr. Frondizi. — ¿Quiere la Presidencia dar cuenta de qué asuntos se trata?

Sr. Presidente (Guardo). — Proyectos de ley, peticiones particulares y otros que no necesiten para su trámite un pronunciamiento de la Honorable Cámara.

Sr. Cámpora. — A ellos me refiero: a los asuntos que se han acumulado en la Secretaría.

Sr. Presidente (Guardo). — Interpretando el asentimiento de la Honorable Cámara, se dará

3

ESTATUTO LEGAL DEL PERIODISTA

Sr. Presidente (Guardo). — Continúa la consideración del artículo 29 del despacho de la Comisión Especial de Decretos Leyes.

Está en consideración el artículo 23 del nuevo estatuto legal del periodista. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Reynés. — Voy a referirme a tres calificaciones que designan a otras tantas especialidades: primero, el archivero; segundo, el cablero y tercero, el dictafonista.

Las definiciones respectivas serían más o menos las siguientes: «archivero», el ayudante de las tareas de organización y manejo del archivo; «cablero», el encargado de preparar aumentando, sintetizando o corrigiendo las informaciones telegráficas, telefónicas o radiotelefónicas; el «dictafonista» es el encargado de recibir informaciones mediante el dictáfono. Son tres especialidades que desde la sanción del estatuto han sido motivo de especial estudio por las comisiones paritarias y se ha llegado a calificarlas con sueldos adecuados a las respectivas tareas. En consecuencia, habría que agregar esas tres definiciones en el artículo 23 entre «reportero» y «cronista».

—El señor diputado Reynés pronuncia unas palabras en voz baja, dirigiéndose al señor diputado Albrieu.

Sr. Presidente (Guardo). — Diríjase a la Presidencia los señores diputados.

Sr. Albrieu. — En el inciso h) del artículo 23 figura ya el «archivero».

Sr. Reynés. — Sí, efectivamente, el archivero figura. Insisto entonces en que se agregue los otros dos casos, y se incluyan en el artículo 53, con los sueldos que correspondan.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — El archivero figura en el inciso h). La comisión aceptaría incluir las categorías de cablero y dictafonista en los incisos respectivos, diciendo: «traductor; reportero gráfico, corrector de pruebas; archivero, cablero, dictafonista: encargados de realizar la tarea que indica su nombre».

Sr. Ravignani. — Creo que no es de esa categoría el cablero.

Sr. Reynés. — Está decidido por la Secretaría de Trabajo y Previsión asignarle al cablero la categoría de cronista. De manera que habría que incluirlo en la correspondiente definición entre los de igual calificación. Al cablero y al dictafonista.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿Acepta la comisión lo propuesto en cuanto al inciso h)?

Sr. Albrieu. — Con categoría de cronista el cablero y junto con el archivero el dictafonista. En cuanto a la definición, en caso de que se aceptara, podría agregarse a continuación del mismo artículo.

Sr. Ravignani. — Como miembro de la comisión, creo que el cablero no puede estar en la categoría h).

Sr. Albrieu. — Como cronista, sí, en el inciso respectivo.

Sr. Ravignani. — Lo que quiero hacer notar es que no es lógico, y que no se puede poner en cualquier categoría al cablero y al dictafonista.

Sr. Presidente (Guardo). — La colocación ha sido indicada por el señor presidente de la comisión.

Sr. Ravignani. — ¿Quiere incluir a todos en el inciso h)?

Sr. Albrieu. — No, señor diputado.

Sr. Presidente (Guardo). — En el inciso h) va la definición del dictafonista; la del cablero en el inciso c).

Sr. Ravignani. — Creo que el señor diputado proponía una nueva categoría para el cablero.

Sr. Reynés. — Lo hemos equiparado.

Sr. Ravignani. — Muy bien.

Sr. Presidente (Guardo). — Se votarán por su orden los incisos del artículo 23, con el encabezamiento proyectado por la comisión y que no ha sido observado.

—Se aprueban los incisos a) y b) del artículo 23 del nuevo estatuto.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Con las modificaciones aceptadas por la comisión quedaría el inciso c), en la siguiente forma: «Cronista: el encargado de redactar exclusivamente información objetiva en forma de noticias o crónicas. Cablero: el encargado de preparar, aumentar, sintetizar o corregir las informaciones telefónicas, telegráficas o radiotelegráficas».

—Se aprueba el inciso c) en la forma de que se acaba de dar lectura.

—Se aprueba el inciso d).

—En consideración el inciso e).

Sr. Albrieu. — Pediría que se diera lectura de la definición de dictafonista que va en el inciso h).

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Dictafonista: el encargado de recibir informaciones mediante dictáfono».

Sr. Candiotti. — Pido la palabra.

En la enumeración que hace el inciso e), al referirse al colaborador permanente, no se mencionan las bibliografías. Por eso propongo que se las incluyan y que, en lugar de: «y otros es-

critos de esta categoría», se diga: «y otros escritos de carácter literario, científico o especializado de cualquier materia», y continuaría como está el despacho.

Esta redacción es más amplia y está más de acuerdo con la realidad. Puede haber colaboradores de poesías, poemas, etcétera.

Sr. Albricou. — No hemos hecho una discriminación taxativa; se da una norma enunciativa. Las modificaciones que propone el señor diputado no cambian el concepto que tuvo la comisión al redactar este artículo, por lo cual las acepta.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer con las modificaciones que ha aceptado la comisión.

—Se lee:

e) Colaborador permanente el que escribe notas, retratos, paralelos, narraciones, descripciones, ensayos, cuentos, bibliografías y otros escritos de carácter literario, científico o especializado de cualquier materia, en un número no menor de veinticuatro anuales y que por la índole de los mismos no corresponde a las tareas habituales a los órganos periodísticos.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración.

—Se aprueba.

—Se aprueban los incisos f) y g).

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El inciso h), con la modificación aceptada por la comisión, quedaría en la siguiente forma: h) Traductor; reportero gráfico; corrector de pruebas; archivero: encargado de realizar la tarea que indica su nombre; dictafonista: encargado de recibir informaciones mediante dictáfono.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración.

—Se aprueba.

—Se aprueban los incisos i) y j).

—En consideración el artículo 24 del nuevo estatuto.

Sr. Albricou. — En la parte final debe decir: «artículo 23, incisos b) a j)».

Sr. Ravignani. — Y en vez de: «estos aspirantes», «los aspirantes».

Sr. Visca. — Deseo que la comisión me explique en qué se ha basado para establecer la proporción de admisión de aspirantes en las empresas de primera categoría. Me parece que uno cada ocho no está en proporción con la importancia de las empresas de primera categoría.

Sr. Albricou. — La categoría «aspirantes» se introduce a los fines de ir formando personal. Se ha tomado como base lo que nos enseña la

práctica y lo manifestado por la Federación Argentina de Periodistas. Ese personal no debe ir a reemplazar sin razón a los que realmente son reporteros o tienen categoría superior a la de aspirantes. Por eso digo que se ha tomado como base el conocimiento práctico de la situación de las empresas, que la comisión ha respetado, pues considera suficientemente idónea para este conocimiento práctico a la comisión directiva de la Federación Argentina de Periodistas.

Sr. Presidente (Guardo). — Si no se hace observación, se dará por aprobado el artículo 24 con las modificaciones introducidas a su redacción.

—Se da por aprobado el artículo 24 del nuevo estatuto.

—Sin observación, se da por aprobado el artículo 25.

—En consideración el artículo 26 del nuevo estatuto.

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

Deseo dejar a salvo mi opinión doctrinaria sobre este artículo y el siguiente. Votaré en contra de los dos artículos.

Sr. Candiotti. — Pido la palabra.

Hago la misma reserva que el señor diputado Frondizi, la que fundaré en brevísimas palabras.

En este artículo se limita el derecho de los intelectuales extranjeros a ocupar cargos en los periódicos argentinos. La República Argentina debe su grandeza al aporte de los hombres del mundo, que han venido a dar sus esfuerzos y capacidad, y a contribuir así a nuestro progreso.

El pensamiento no tiene patria, señor presidente. En nuestra historia hemos visto frecuentemente a argentinos que han debido abandonar el país y que para poder ganarse la vida en el exilio, han tenido que recurrir a la prensa. No voy a citar nombres de escritores y periodistas nuestros que huyendo de la dictadura han ido al extranjero a vivir un clima de libertad. La República Argentina no puede olvidar su historia.

Actualmente una xenofobia extraña a nuestra mentalidad está penetrando en nuestras instituciones con disposiciones de esta naturaleza. Hemos visto también que en la universidad argentina se pone un límite a la ciencia universal. El gran Einstein no podría enseñar en muchas de nuestras universidades, y eso es una vergüenza.

Voy a proponer la supresión del artículo 26 porque es contrario a la amplitud del espíritu argentino de tolerancia. Es necesario que los argentinos tengamos en cuenta el peligro que

significa esta penetración de un nacionalismo exótico en la vida argentina.

Sr. Sargentini. — ¿Pero qué casos concretos cita el señor diputado?

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Visca. — No comparto las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado, y destaco la dualidad que significa la posición, en esta Cámara, del sector a que pertenece el señor diputado, si es que se solidariza con las palabras que termina de expresar.

Hace pocos días, en este recinto, se ha querido disminuir la personalidad de un funcionario, hoy ciudadano argentino, que colabora con el gobierno de la Nación. Se ha hecho, precisamente, el argumento contrario al que acaba de formular el señor diputado. Quiero destacar este hecho, porque desde cuando se discute este proyecto de Estatuto del Periodista, como ya se ha venido señalando en otras oportunidades, el sector de la oposición ha puesto de manifiesto un espíritu eminentemente electoralista y político, para resolver este problema que afecta a los periodistas del país, no sólo en cuanto se refiere a la emisión de las ideas y el concepto de la profesión, sino frente al concepto del sector peronista, que considera indispensable la seguridad y el porvenir del gremio de que se trata, no sólo en su aspecto de función altamente idealista y patriótica, sino también en lo que respecta a sus aspectos profundamente humanos.

Quiero destacar este hecho singular: que frente a una cuestión que puede atraer las simpatías de un importante sector de la opinión pública que tiene en sus manos el contralor de las noticias y la información, interna o exterior de las cosas del país, el sector del señor diputado adopta un criterio; y cuando se refiere a otra cuestión que también ha tenido en este recinto su exteriorización por la capacidad de un hombre que no ha nacido en este país, pero al que hoy pertenece por la ciudadanía y que lo honra por su capacidad, el sector de la oposición ha adoptado un criterio totalmente distinto. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Frondizi. — Yo me limito a dejar constancia en muy pocas palabras, de una discrepancia doctrinaria sobre estos dos artículos, para no dilatar la consideración y aprobación de este proyecto de ley; pero las manifestaciones hechas por el señor diputado Visca me obligan a formular algunas aclaraciones. Es absolutamente inexacto que el sector de la Unión Cívica Radical esté haciendo cuestiones electoralistas con esta iniciativa, como no lo ha hecho en este recinto respecto de ninguna otra cuestión. Los hombres que llevan la demagogia a sus más altos extre-

mos pretenden hablar aquí en la Cámara un lenguaje de estadistas...

Sr. Visca. — Está completamente mal informado.

Sr. Frondizi. — En cuanto a la posición del sector de la Unión Cívica Radical frente al problema de los extranjeros, es perfectamente clara y definida, porque adopta un criterio que ha sostenido desde el llano, y desde el gobierno.

Pero el señor diputado Visca ha hecho también una referencia a la actitud de este sector, frente al argentino naturalizado que ha redactado el plan quinquenal.

Sr. Visca. — Está equivocado el señor diputado.

Sr. Frondizi. — Yo deseo decir que los hombres de la Unión Cívica Radical somos demócratas auténticos, y en ese concepto respetamos a los habitantes del país en cuanto hombres y no en cuanto argentinos naturalizados o argentinos nativos.

Sr. Díaz. — Un día dicen una cosa y otro día dicen otra.

Sr. Frondizi. — Nosotros hemos combatido a muchos extranjeros, a muchos argentinos naturalizados, y a muchos argentinos nativos, no por su nacionalidad, sino porque son hombres que pretenden traer al país sus ideas totalitarias.

Sr. Visca. — Eso es inexacto.

Sr. Frondizi. — A nosotros no nos alarma que un argentino naturalizado haya redactado el plan quinquenal...

Sr. Visca. — Ha colaborado.

Sr. Frondizi. — ...ni tampoco que un extranjero haya intervenido en la redacción de las leyes de ordenamiento bancario. Lo que sí nos alarma y alarma al país es que algunos hombres que responden a ideas totalitarias pretendan trasplantar al suelo argentino los odios de Europa, en donde han resultado definitivamente barridos, como resultarán también barridos de la Argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albricou. — La mayoría de la comisión va a mantener los dos artículos y para ello tiene dos razones que son igualmente valederas e imperiosas: una que atiende especialmente a nuestro gremio de periodistas, vale decir a los periodistas argentinos, para los cuales descamos que siempre encuentren trabajo y que sus plazas no se vean ocupadas por personas extrañas; un segundo fundamento es que la mayoría de la comisión quiere en todo momento, como lo quiere el bloque a que pertenezco, que nuestro país tenga alguna vez su cultura propia.

Hasta ahora, hemos vivido en cuanto a cultura, como un país de refracción o de asimilación de culturas foráneas. Queremos la cultura argentina. Y con estos pequeños episodios puestos en leyes un poco discontinuamente creemos

que podemos llegar a asegurar, no para hoy ni para mañana, sino para dentro de algunos años, una cultura argentina.

Que nuestro gobierno y el pueblo al que representamos estén llevados por la demagogia es una afirmación que tiene su mentís más rotundo en el hecho de que estamos dando cumplimiento a las promesas preelectorales sancionando todas las leyes obreras de la revolución. Cuando se cumple, no hay demagogia, hay plena democracia. Y son los representantes del pueblo los que estamos sancionando las leyes sociales. *(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)*

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 26.

—Se vota y resulta afirmativa de 52 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Busaniche. — Pido que se rectifique nominalmente la votación.

Sr. Presidente (Guardo). — Si el pedido está suficientemente apoyado, se rectificará nominalmente.

—Resulta suficientemente apoyado.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Secretario (González). — Sobre un quórum de 95 señores diputados, han votado 58 por la afirmativa y 37 por la negativa.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez (N.), Alvarez Pereyra, Alvarez Pérez, Arévalo Cabeza, Argaña, Arias, Ayala López Torres, Barreiro, Bustos Fierro, Cámara, Cámpora, Casas Noblega, Cooke, Corvalán, Decker, de la Torre, Díaz, Díaz de Vivar, Dri, Fernández (B. S.), Fernández (H. S.), Ferrando, Fregossi, Garaguso, Garay, García Quiroga, Giménez Vargas, Klix López, Lareo, Mariategui, Martínez Luque, Montes de Oca, Obeid, Orozco, Osinalde, Ottonello, Palacio, Pasquini, Perea, Petrucci, Ponce, Pontieri, Raña, Repetto, Reynés, Rumbo, Saravia, Sarmiento, Sorgentini, Sustaita Seeber, Tesorieri, Tommasi, Toro, Urdapilleta, Vergara, Villafañe y Visca.

—Votan por la negativa los señores diputados: Aráoz, Balbin, Bertini, Bonazzola, Busaniche, Candioti, Córdova, Cufre, del Carril, del Mazo, Díaz Colodrero, Errecart, Ferrer, Frondizi, González Funes, Lencinas, Liceaga, López Serrot, Mac Kay, Maineri, Mántaras, Martínez Guerrero, Mosset Iturraspe, Pastor, Pérez de la Torre, Pueyrredón, Ravignani, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rubino, Santander, Sobral, Solanet, Uranga, Vanasco y Zinny.

—En consideración el artículo 27 del nuevo estatuto.

Sr. Frondizi. — Mantenemos la misma observación.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo como figura en el despacho.

—Resulta afirmativa de 58 votos. Votan 94 señores diputados.

—En consideración el artículo 28 del nuevo estatuto.

Sr. Frondizi. — Después de las palabras «deberá comunicar», hay que intercalar las siguientes: «sus decisiones».

Sr. Albrieu. — La comisión acepta.

—Se da por aprobado el artículo 28 con la modificación aceptada por la comisión.

—En consideración el artículo 29 del nuevo estatuto.

Sr. Candioti. — Pido la palabra.

Voy a proponer un agregado al artículo 29. Consiste en decir que la circunstancia de estar afiliado a «un sindicato, asociación gremial o partido político» no impedirá el ingreso ni será causal de despido.

Sr. Orozco. — Sería interesante que diera la razón de la proposición.

Sr. Candioti. — Sí, señor. La razón es que todos los ciudadanos argentinos tienen la libertad de pensar en política como lo crean más conveniente.

Sr. Orozco. — ¿Y el artículo impide eso?

Sr. Candioti. — Pero es necesario decirlo expresamente, porque la ley debe prever todos los casos en que pueda llegar a impedirse que un ciudadano argentino opine libremente en cuestiones políticas o que pueda ser perseguido por sus ideas políticas.

Sr. Visca. — Eso está en la Constitución.

Sr. Orozco. — Me parece que habría que dejar de tocar el violón un poco.

Sr. Albrieu. — En realidad es una redundancia, pero la comisión, con el mismo espíritu de seguir trabajando para sancionar en el día este despacho, acepta la expresión «o partido político autorizado».

Varios señores diputados. — ¡No! ¡No!

Sr. López Serrot. — ¿Cómo queda el artículo?

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Artículo 29. — La circunstancia de que el periodista sea afiliado a un sindicato, asociación gremial o partido político autorizado...»

Varios señores diputados. — ¡No! ¡No!

Sr. Díaz Colodrero. — ¿Autorizado por quién, señor presidente?

Sr. Visca. — Por la ley.

Sr. Frondizi. — No aceptamos, señor presidente, el concepto de «autorizado».

Sr. Presidente (Guardo). — Es la comisión la que ha aceptado.

Sr. Frondizi. — La comisión no, señor presidente; la mayoría solamente. La minoría no acepta. Un partido político es tal porque tiene existencia histórica; no puede depender de la autorización de ningún poder.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Orozco. — Señor presidente: a mí me parece que el agregado que se propone a este artículo en realidad no tiene la más mínima razón de ser. Lamento que la comisión lo haya aceptado. Creo que con estos agregados, buscando el punto y la coma, lo único que estamos haciendo es demorar inútilmente la sanción de esta ley.

Por esta razón voy a votar en contra del agregado que se ha propuesto.

Sr. López Scarot. — Se ha demorado la sanción de esta ley, precisamente porque a moción de un diputado de su sector se resolvió el viernes último que pasáramos a cuarto intermedio hasta el día de la fecha. De lo contrario, los periodistas ya hubieran tenido el estatuto que este bloque estaba dispuesto a sancionar ese mismo día.

Sr. Díaz. — Estaban dispuestos, pero en cada artículo la discusión duraba media hora.

Sr. Candiotti. — Nosotros hemos estado dispuestos siempre a tratar este despacho y estamos dispuestos a continuar en esta Cámara, hoy, hasta que se sancione la ley. Veremos si nos acompañan los diputados de ese sector. Además, si se dice que no puede ser despedido el periodista que pertenece a un sindicato o asociación gremial (y es un derecho de todo ciudadano pertenecer a una asociación gremial), no sé por qué se oponen los señores diputados a que se agreguen las palabras que he propuesto.

Sr. Albrieu. — Retiro la palabra «autorizado», señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Entonces, habiendo asentimiento por el resto del artículo 29 del nuevo estatuto, queda aprobado con el agregado aceptado por la comisión.

—Sin observación se aprueban los artículos 30 y 31 del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 32.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Albrieu. — En nombre de la comisión, manifiesto que el artículo 32 quedaría como lo ha propuesto la Federación Argentina de Periodistas, en la siguiente forma: «El periodista que preste servicios en más de dos empresas desempeñando funciones propias del personal permanente y habitual de las mismas, será considerado como agencia noticiosa.»

Entiendo que esta reforma es aceptada por la totalidad de los miembros de la comisión.

Sr. Ravignani. — Pero debo decir dos palabras al respecto, señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Según lo anunciara en mi interrupción al señor diputado Santander, expresé que iba a mantener mi anteproyecto de ley del periodista que en la subcomisión redactamos con el señor diputado Albrieu. Entre paréntesis, diré, en forma tangencial, que la conducta que hemos observado diputados de diversos sectores, entre ellos el que habla en nombre de la Unión Cívica Radical en la forma de redactar este estatuto, desmiente las palabras que acaba de manifestar el señor diputado Visca en cuanto ha afirmado que hemos hecho de éste un problema político. Yo invito al señor diputado Albrieu a que diga si en algún momento yo he planteado cuestiones de índole política al redactar el estatuto.

Sr. Bustos Fierro. — Nos estamos alejando de la cuestión.

Sr. Ravignani. — Pido que se me respete en el uso de la palabra. Esta excitación de los señores diputados me revela que no estamos hablando con claridad.

Sr. Visca. — Yo me he referido a la política del sector de la Unión Cívica Radical en el recinto...

Sr. Ravignani. — Continúo. Deseo no ser interrumpido.

Sr. Visca. — ...y no a la labor del señor diputado en el seno de la comisión, que no conozco.

Sr. Ravignani. — Deseo no ser interrumpido. El señor diputado Visca...

Sr. Visca. — Que no me nombre, porque no lo voy a dejar hablar.

Sr. Ravignani. — ¡Cómo no me va a dejar hablar!

Sr. Visca. — Lo voy a interrumpir.

Sr. Ravignani. — Que el señor presidente lo llame al orden.

Sr. Presidente (Guardo). — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

Sr. Visca. — Que no personalice el señor diputado. El reglamento debe empezar por respetarlo el señor diputado.

Sr. Presidente (Guardo). — No personalice, señor diputado por la Capital; y no interrumpa al orador el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ravignani. — El diputado que habla puso toda su decisión y toda su buena voluntad en la redacción de este estatuto; pero como ha tomado derivaciones públicas que no puedo silenciar, advierto que ya dije en el momento oportuno que yo reponía el artículo 32 de mi anteproyecto, que ha leído también el señor diputado Albrieu.

Al mismo tiempo aprovecho para decir que mantengo también la redacción primera de mi anteproyecto en el artículo 55, como en lo relativo a los 500 pesos para los hijos.

Es injusto lo que se ha hecho público de haberme endosado la responsabilidad de la modificación del artículo 32. Este artículo 32 en su limitación se origina en un proyecto de la Federación de Periodistas, en el que se estableció textualmente lo que acabo de leer: periodista que presta servicios en más de dos empresas.

El presidente de la Federación de Periodistas sostuvo en la subcomisión el principio de la limitación en cuanto a la acumulación, y permitirla únicamente en cuanto a dos cargos, pues se nos denunció que había quienes tenían cuatro, cinco y hasta seis de la misma índole, desplazando así la actividad de otros colegas.

Aquí están mis borradores. Tan así es, que cuando fundé lealmente el despacho —no por lo que a mí sólo concernía, sino por el despacho en sí— no silencié las razones, pero dije que estaba perplejo frente a esta reforma. Y si en alguna manera salió como salió reformado, era para salvar el principio; pero me reservaba todavía la opinión definitiva.

Considerando el asunto a fondo, creo que efectivamente hay razón en la limitación a los cargos, porque esto contempla la realidad de la profesión del periodista y nosotros no podemos apartarnos de las necesidades esenciales presentadas por los mismos periodistas por medio de un órgano tan responsable.

Jamás pensé que el noble propósito que puse en el esfuerzo de redacción hasta horas de la madrugada con el señor diputado Albrieu, con la presencia del señor presidente de la Federación de Periodistas, para seguir, luego de pocas horas de sueño, hasta terminar con la redacción de todas las disposiciones, en un trabajo sostenido para lograr que esto fuera una ley, pudiera ser interpretado en forma de endosarme una responsabilidad de un asunto del cual no soy autor.

Este no es para mí más que el problema de los trabajadores de la pluma. No es problema político. Si fuera un problema político sería mezquino y sería rebajar los propósitos de este Parlamento. ¿Por qué se ha de hacer siempre política? ¿Qué razón hay para sostenerlo así? ¿Acaso no hay grandes intereses del país que

escapan a un sector político, para convertirse en intereses puramente nacionales?

Si alguien quiere desvirtuar con mentiras y confusiónismo, el que así procede lo hace por su cuenta. A mí no me perturban ni las injusticias, ni la incomprensión, ni las imputaciones mal intencionadas. Algún día se reconocerá la verdad y el anhelo del diputado que habla —coincidente con el de sus colegas de sector—, en cuya conducta siempre ha privado un sentido recto y jamás ha buscado en río revuelto el aplauso o las consagraciones.

En este momento no puede afrontar la responsabilidad de decir que soy autor de la modificación, porque no es cierto.

Mantengo, pues, el artículo 32, redactado con el señor diputado Albrieu.

Sr. Santander. — Retiro la proposición y adhiero a la del señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — El artículo que incorporamos fúe propuesto por la Federación de Periodistas. Es clarísimo: «El periodista que prestase servicios en más de dos empresas, desempeñando funciones propias del personal permanente y habitual de las mismas, será considerado como agencia noticiosa.»

Sr. Visca. — ¿Así que el periodista será agencia noticiosa?

Sr. Rojas (N.). — La redacción es incorrecta.

Sr. Albrieu. — Podría invertirse, diciendo: «Será considerado agencia noticiosa el periodista que prestase servicios en más de dos empresas desempeñando funciones propias del personal permanente y habitual de las mismas.»

Sr. Reynés. — Voy a explicar el sentido de la redacción que se había dado.

En el estatuto se establece que las agencias noticiosas que tengan su sede en la Capital por ejemplo no podrán distribuir informaciones en el orden local, es decir, no podrán distribuir informaciones en la Capital Federal.

Es la adaptación al articulado de la ley, de una resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión ante el caso de cronistas de tribunales, de policía y otros, que cobraban cincuenta pesos de ocho o diez diarios y que cumplían su misión informativa, dando una copia de las noticias en papel carbónico a cada uno de ellos.

Sr. Ravignani. — En la Bolsa pasaba lo mismo.

Sr. Reynés. — Prácticamente realizaban funciones de agencias noticiosas de orden local. Eso es lo que quiere evitar la Federación de Periodistas, a fin de que el trabajo esté a cargo de varios.

Sr. Albrieu. — En definitiva, en lugar del artículo 32, la comisión propone lo siguiente: «Al periodista que preste servicios en más de dos empresas, desempeñando funciones propias del personal permanente y habitual de las mismas, le serán aplicadas las disposiciones de este estatuto sobre agencias noticiosas.»

Sr. Ravignani. — Este artículo va en reemplazo íntegro del 32.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 32 del nuevo estatuto, con la redacción que acaba de proponer la comisión, en reemplazo de la que figura en el despacho.

— Resulta afirmativa de 74 votos; votan 91 señores diputados.

— En consideración el artículo 33 del nuevo estatuto.

Sr. Mosset Iturraspe. — Pido la palabra.

Deseo proponer un agregado a este artículo 33 y conocer al respecto la opinión de la comisión.

En donde dice: «Es incompatible el desempeño de la función periodística con la del empleo público» propongo que se diga: «Es incompatible el desempeño de la función periodística con la del empleo o función pública de carácter permanente».

Puede darse el caso, señor presidente, de que periodistas sean designados para funciones que tengan relación directa con su profesión. El Poder Ejecutivo nacional o un ejecutivo provincial puede designar a periodistas para que organicen o reorganicen oficinas de prensa o para funciones de otro tipo, como interventores en comunas o miembros de comisiones investigadoras. Son éstas funciones transitorias, que no pueden, en mi concepto, dada su naturaleza y carácter transitorio crear la incompatibilidad que señala el artículo 33 en la forma que está redactado por la comisión especial.

Sr. Visca. — Pido la palabra.

Propongo la supresión de este artículo. Soy así consecuente con la posición tomada en oportunidad de discutirse el sueldo mínimo para el personal del Estado, durante la cual sostuve, con el señor diputado Montiel, que es condición propia de todo hombre el tratar de mejorar su situación económica. Entiendo — y así lo entienden también muchos compañeros del sector peronista — que este artículo debe ser suprimido, por la razón expuesta.

Sr. Albrieu. — Este artículo, introducido por la comisión, responde a una resolución del VII Congreso de Periodistas Argentinos, en el cual se dejó establecido el deseo del gremio de independizar al periodista profesional de toda interferencia extraña a fin de lograr que el periodista sea realmente un profesional y viva de su trabajo periodístico.

Además, la comisión desea jerarquizar al gremio de periodistas, por una parte; y existe, por otra, un principio de higiene industrial en todas las leyes obreras, con respecto a jornada de labor, que nos induce a mantener, aunque más no sea a título personal, la inclusión de este artículo. No es posible permitir que un periodista, cuya salud se resentiría trabajando más de seis horas diarias o treinta y seis sema-

nales, preste durante otras seis horas diarias más, servicios al Estado.

La comisión pretende, como digo, jerarquizar, cumpliendo así un principio de ética y a la vez cumplir con el mencionado principio de higiene industrial, y por ello mantiene el artículo.

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

La minoría de la comisión mantiene también en todas sus partes el artículo 33, con la modificación propuesta por el señor diputado Mosset Iturraspe.

La primera parte de este artículo establece la incompatibilidad del desempeño de la función periodística con la del empleo público.

En la segunda parte del artículo se contempla la situación de los periodistas que actualmente son empleados públicos. En este caso no se lesiona ningún derecho adquirido. Pero nosotros, por las razones que ha dado el señor presidente de la comisión, no podemos aceptar que se suprima la incompatibilidad. Esta ley, señor presidente, tiene un objeto fundamental: asegurar a los periodistas condiciones de vida digna; de manera que tiende a la creación del periodista profesional, que dedique toda su actividad a esa función específica. Nosotros queremos, señor presidente, que el periodista trabaje solamente seis horas, y queremos también que tenga un sueldo digno, para que sea un hombre independiente y para que tenga el tiempo y los recursos necesarios para aumentar su cultura. ¿Pero, qué ocurriría si los empleados públicos pudieran ser periodistas? Evidentemente que en muchos casos estarían en situación de faltar a su deber, o como periodistas o como empleados públicos. No es posible que a la categoría de periodista, que debe tener una absoluta independencia frente al poder público, vaya unida la situación de subordinación del mismo al poder administrador.

No podemos, pues, bajo ningún concepto aceptar la proposición del señor diputado.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rumbo. — Voy a proponer que se agregue en este artículo la incompatibilidad con el desempeño de la función periodística, no sólo a los empleados públicos, como dice el artículo sino inclusive a los empleados de empresas concesionarias de servicios públicos. Será una forma de completar el pensamiento de la incompatibilidad de la función periodística con la del cargo público o en empresas concesionarias de servicios públicos.

Sr. Albrieu. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Cándioti. — Preguntaría a la comisión si estaría en condiciones de aceptar una excepción a este artículo.

El inciso e) del artículo 23 considera periodistas colaboradores a los que publican dos colaboraciones mensuales en un periódico. Existen muchos escritores argentinos que son profesores universitarios, o de segunda enseñanza, o que tienen cargos públicos, y que, como poetas o escritores publican semanalmente en los periódicos poemas, monografías históricas, etcétera. A mi juicio, no sería justo privarlos de esa colaboración, porque sean empleados públicos, nacionales, provinciales o municipales.

Yo propondría el siguiente agregado: «Están exceptuados de las disposiciones del presente artículo los colaboradores literarios, científicos y especializados en cualquier materia.»

Sr. Rumbo. — Eso es muy peligroso, sobre todo después de mi agregado sobre personal al servicio de empresas concesionarias de servicios públicos, porque escudándose en la excepción que propone el señor diputado podemos dejar abierta una puerta falsa por la que tengan entrada artículos que, en el fondo, serían una forma muy disimulada de fomentar determinada actividad.

Sr. Candiotti. — He pedido la opinión de la comisión, porque no sería justo privar de ese derecho a escritores argentinos.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Albrieu. — Lo que quiere la comisión con este despacho es crear el periodista profesional, la profesión de periodista. En ese sentido la persona que tiene otra profesión a la que se dedica habitualmente, no puede ser profesional periodista. Se mantiene, pues, la redacción del artículo, con los agregados propuestos por los señores diputados Mosset Iturraspe y Rumbo.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Guillot. — Señor presidente: no voy a pedir a la comisión la modificación de ningún aspecto de este artículo, porque voy a dar las razones personales por las cuales votaré por la negativa, pues creo que este artículo no debe figurar en el Estatuto del Periodista.

Toda la arquitectura legal que estamos discurtiendo y votando, tiene para mí una indudable semejanza económica. Si la analizamos con perspectiva, podríamos afirmar que la misma implica un cuerpo legal para defender al periodista, proletario al fin, del patrono, empresa periodística.

Yo estoy de acuerdo con que se vaya legislando, en forma casi diría exquisita, sobre los derechos del periodista, las garantías que al mismo deben asistirlo frente al patrono, que si a veces es un soñador como él, otras es una poderosa empresa comercial que rinde extraordinarias ganancias a sus dueños.

Hasta este instante, a través de todo el articulado, le dimos al periodista toda clase de

garantías para jerarquizarlo como proletario intelectual, para defenderlo, para que no siga inerme frente al patrono. Pero ahora en este artículo 33 vamos a legislar la actividad misma del periodista, no ya su posición frente al patrono, empresa. Y yo afirmo —porque lo he recogido como expresión cabal a través de la observación en todos los años que llevo vividos— que en el fondo de cada periodista hay un soñador, hay un romántico y —¿por qué no decirlo?— hay un poeta. El hombre que corre desaliñado de la mañana a la noche, de redacción en redacción, que está siempre con un sentido perfecto de la oportunidad en todos los hechos callejeros y en todas las cosas que conmueven o pueden conmover a la opinión pública; ese hombre que tiene un sexto sentido por arriba del común de la gente; ese hombre que sabe vivir soñando, que tan pronto llega jadeante a la redacción con la noticia que no ha alcanzado a elaborar, que sólo lleva el hecho visto, pero que es capaz mañana de hacer el suelto que haga opinión pública; que a veces escribe el cuento para la revista que no es de la empresa en que trabaja, que otras veces ensaya la novela o la obra teatral; a ese hombre lo conocemos todos y nos deleitamos todos con la expresión de su talento en las páginas de los diarios del país. Ese hombre, que es una fuerza humana, no puede estar limitado en un artículo sobre incompatibilidad.

Yo entiendo que para el periodista que, en el fondo, siempre tiene la medula de un artista y de un poeta, no puede haber más incompatibilidad que aquella que resulte de la superposición de sus honorarios, por la razón material de que no puede trabajar en varias partes a la vez.

No es posible que en este articulado legal, que hasta el momento no va siendo sino de corte económico, insisto, para defender al periodista frente a la empresa poderosa, vayamos a limitarle ahora su radio de actividad, sus horas de labor y su porvenir económico.

Afirmo que el periodista no debe tener más incompatibilidad que la que resulte de su propia actividad y de la superposición de horarios. Y no se me diga que el cargo público puede comprar el sentir y el pensar del periodista, porque sin entrar a dar detalles, afirmo, y no se me podrá negar, que un poderoso órgano de opinión de esta Capital tenía el 70 % de su personal de redacción en empleos del Estado y, sin embargo, desde ese diario se ha atacado y se está atacando al actual gobierno de la República. Y casi todos los órganos poderosos de la opinión, excepto alguno, tienen gran parte de los miembros de su redacción en oficinas públicas y, sin embargo, desde esos diarios en el ejercicio de un derecho de opinión que no discuto, se ataca en forma habilidosa al go-

hierno nacional. Llegamos pues a la conclusión, de que hay algo insobornable en el periodista, que es su modo de pensar, su punto de vista, y sin embargo, vamos a establecer esta incompatibilidad. Lo único que haremos con ello, es esto por demás singular: dictar una ley estableciendo un tratamiento diferencial para los que ya tienen el empleo público y para los que no lo podrán alcanzar nunca. Y vamos a llegar a esta conclusión: que los periodistas que ya tienen hecha su vida profesional, los hombres que están en las redacciones de los grandes diarios, que por lo general tienen ya su presupuesto normalizado, conservarán el empleo público, mientras que al muchacho joven, soñador y romántico, que comienza su tarea periodística, le vamos a prohibir que mañana pueda lograr un empleo público, si es competente y encuentra quien se lo otorgue. Habremos establecido así, por una ley del Estado, un tratamiento diferencial que, afirmo, va en contra del concepto de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de la República.

Sé que en los congresos de periodistas se ha expresado como suprema aspiración lograr la independencia del periodista; pero he recorrido las resoluciones de dos congresos y no he encontrado ninguna que implique un mandato imperativo de que se deba llegar a esa situación apenas se expresa el anhelo de que así suceda.

Como diputado de la Nación desearía ver primero el resultado en la práctica de la aplicación del estatuto con respecto a la economía del periodista. Recién cuando el mismo haya sido aplicado y cuando dispongamos de los resultados de esta arquitectura legal sobre la economía individual del periodista, habrá llegado el momento de ver si establecemos alguna incompatibilidad.

Con la única pretensión de aclarar mi posición personal en este momento, quiero recordar a mis honorables colegas que si se sanciona el artículo 33 habremos dictado una ley que dividirá a los periodistas en dos grupos, sin más razón que la de que unos ya tienen empleo público y no se les pueda tocar, porque ello es legal, y la de otros que no lo tienen, y por lo mismo, no podrán llegar a tenerlo nunca.

Esa es mi posición. Honestamente declaro ante la Cámara que voy a votar en contra del artículo 33 del estatuto que tenemos en consideración. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Reyes. — Pido la palabra.

En nombre del sector laborista que represento voy a hacer algunas manifestaciones respecto al artículo 33 y, claro está, no voy a coincidir con la idea expresada por el señor diputado Guillot.

Debe tenerse en cuenta la incompatibilidad en la profesión del periodista. No es el caso de dar vuelo literario o lírico a la cuestión. Todos conocemos bien las inquietudes y los propósitos

espirituales y culturales que guían a los hombres en determinadas circunstancias. Pero los líricos, los soñadores y los poetas que han querido construir el mundo con los elevados conceptos de su arte, casi todos murieron en la horca o fueron desterrados o enviados a la cárcel.

No es posible que las inquietudes soñadoras, poéticas o románticas nos hagan cerrar los ojos ante la evidencia: la cuestión no se circunscribe a un determinado número de románticos y soñadores que ganan poco haciendo literatura y que la mayor necesidad de su hogar van a cubrirla con la remuneración de otros cargos, especialmente en las reparticiones públicas, que es el caso del artículo 33 del estatuto.

Pero ojalá la mayoría de los hombres tengamos esas profundas inquietudes literarias, esos profundos conceptos del sueño humano, que parecen tan maravillosos, a veces, que nos transportan a nosotros mismos, creadores de esos cuentos, de esas poesías, de esas leyendas, a un mundo mejor; ojalá que toda esa fantasía del alma humana pueda convertirse en realidad para esta civilización que se derrumba bajo un crudo materialismo. Nosotros entendemos perfectamente que por razones sentimentales, de economía, de solidaridad humana en la vida económica del individuo, tenemos muchas veces que callar esto que va en perjuicio de unos pocos y en beneficio de muchos.

El gremio de periodistas no ha podido tocar a fondo este asunto, porque lesiona los intereses de unos pocos periodistas, y no es el gremio de periodistas el llamado a crear una disensión en su propia organización. Hay algunos periodistas que ganan doscientos pesos en las redacciones de los diarios, pero ganan mil pesos en las oficinas públicas del Estado. Repito que en ese gremio de los trabajadores de la pluma y del intelecto, de esos románticos y soñadores, poetas y literatos, como decía el diputado Guillot y que lo son en muchísimas formas en todas sus inquietudes manifestadas a través de sus inspiraciones y de esos conceptos espirituales puestos por ellos al servicio del pueblo, son muy pocos los que se verán lesionados por la incompatibilidad que establece este artículo. Se debe dictar una ley en que se establezca el verdadero cometido del periodista, no del soñador que tiene un puesto público y porque quiere soñar escribe para que le paguen como periodista, no del poeta que en un momento de holgura o de descanso, cuando sale de su tarea, va a su casa y, junto al calor del hogar, escribe esas poesías sublimes como esparcimiento espiritual, y no para cobrarle al diario en que colabora. Todo eso no depende de esta ley: dependerá de una nueva ley, que debe dictarse, si es necesario, para dar amparo a todos los soñadores, los locos, los poetas y los románticos que hacen grata la vida de su pueblo, para darle amparo por medio de una

institución donde esos hombres con inquietudes espirituales obtengan facilidades para publicar sus versos, sus libros, sus cuentos, sus obras, sus producciones teatrales. Eso es lo que debemos crear para dar mayor expansión a todos esos románticos, poetas, literatos en ciernes, desconocidos unos y contenidos otros. Debe haber una institución de carácter popular, costeada por el Estado, para que todos esos hombres vayan a esos lugares de arte y ciencia a dilucidar sus ideas, a publicarlas y a ver de qué manera sueña uno mejor que el otro.

Pero en cuanto a esta tarea específica, que es el vehículo de cultura, de ciencia y de arte, en que el pueblo debe determinar con cuál periódico se quedará, según sea el que tenga mejores periodistas, esté mejor escrito o interprete más exactamente los afanes, las inquietudes y las esperanzas del pueblo en el orden económico, político, cultural, debemos establecer una incompatibilidad, porque, de lo contrario, vamos a llegar a lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo ha comprado los diarios y costea los gastos de sus redactores con empleos en la administración. No se llegará a establecer verdadero periodismo cuando el periodista —con todas sus inquietudes de poeta, con todos sus sueños de romántico, con toda su cultura— no pueda escribir sino lo que se le antoje al gobernador o al caudillo del pueblo y cuando, si así no lo hiciera, sus sueños irán a dar, junto con su hambre, a la calle.

Si el gremio de periodistas no ha podido traer aquí su verdadera palabra, es porque, todos sabemos, en el seno de cada organización se crean dificultades por pequeños intereses personales, que dificultan la unificación de criterios.

Si nosotros no hubiéramos luchado en el orden gremial para que los trabajadores no trabajaran más de ocho horas diarias, a pesar de que desde 1889 se viene produciendo el proceso histórico de la lucha de los trabajadores del mundo por esa conquista, no lo hubiéramos obtenido si se hubiera aceptado este mismo criterio de no establecer incompatibilidad, aunque mayores horas de trabajo pudieran pagarse a precio de oro por las empresas industriales y comerciales.

De no existir una cláusula en este sentido, la mayoría de los diarios que aparezcan en el país llegará la hora en que van a ser diarios oficialistas y los periodistas ocuparán posiciones y puestos públicos, compitiendo también los diarios con otras empresas de capitales privados y públicos.

Si en éstos, como en todos los tiempos, las grandes empresas capitalistas han monopolizado la inteligencia de los señadores que son esos periodistas, en muchas grandes empresas, donde han estado escribiendo o traduciendo por 40, 50 ó 70 pesos, habrá de convenirse en que

es esencial crear con esta ley el sueldo remunerativo, de acuerdo con el standard de vida por que atraviesa el país; pero la incompatibilidad tiene que existir, para que en el periodismo no entre la inmoralidad y que pueda, por 300 pesos, escribir alguien lo mismo en «La Prensa», en «La Nación», en «La Razón» o en «Crítica» porque disfruta de otro sueldo de 800 pesos que le paga el Estado.

En nombre del sector laborista que represento, me pronuncio así en favor de la incompatibilidad, o sea en favor del artículo 33, porque entiendo que de una vez por todas hay que perfilar la verdadera profesión del periodista, y eso tiene que hacerse desde ahora, junto con la nueva conciencia en marcha que sigue el mundo dentro de su desenvolvimiento histórico para que los señadores y los poetas no terminen un día en los calabozos, sino que obtengan la retribución que a su profesión corresponde.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Voy a oponerme también, en forma decidida, a la aprobación de este artículo, al menos tal como está proyectado.

Al término de mis razones, voy a concluir solicitando, o bien la eliminación total del artículo, o bien la modificación que mencionaré.

Digo la eliminación total del artículo, porque ello había sido resuelto por el sector mayoritario a que pertenezco, que había encargado ser intérprete de ese pensamiento en la sesión de hoy, al señor diputado Reynés. Pero como ese pensamiento no ha sido aún expuesto — ignoro los motivos —, quiero, por lo menos, dejar salvada mi posición sobre el problema que nos ocupa, porque por diversas razones la aprobación del artículo tal cual está proyectado, es manifiestamente inconveniente.

En primer término, parecería un argumento de lógica jurídica, una razón de sistemática legislativa, que la incompatibilidad de los cargos públicos con otras actividades fuese establecida por el estatuto del personal civil de la administración nacional. Cuando consideremos ese estatuto llegaría el momento de expresar cuáles son las actividades incompatibles con la función de Estado.

En nombre de esa razón de sistemática legislativa paréceme, pues, que es camino equivocado partir de los estatutos que se refieren a otras actividades para crear incompatibilidades en el servicio del personal civil de la Nación.

Por otra parte, me opondré porque conceptúo que la solución, tal como está en el artículo, nos lleva a cometer una flagrante injusticia.

Sin duda, el espíritu de la disposición proyectada responde a declarar de una parte el principio de la independencia de la opinión del periodista con respecto a los poderes públicos y, por otra, sentar el principio de incompatibilidad en el ejercicio de actividades simultá-

neas, que obedece a una necesidad impuesta por la división del trabajo.

Vale decir, que estaríamos de una parte en presencia de un principio de carácter ético: la posible influencia sobre el periodista de su superior jerárquico, en el empleo público; y de otra parte estaríamos en presencia de una razón técnica, o sea, el principio de la división del trabajo.

Ambos principios, colocados en el plano de la pura mención teórica, como todos los principios de carácter ideal, no pueden sino recibir la más entusiasta adhesión. Más aún: creo que no hay ningún principio de tipo idealista que no sea sino objeto de fervorosa adhesión, por todo ser pensante. Así, por ejemplo, si alguien formula el principio de la paz universal, el principio de la justicia social, o el principio de la fraternidad humana, plebiscitariamente el universo entero levanta sus manos para aplaudirlo. Pero a pesar de que tales principios reciben tan calurosa adhesión, las naciones se arman y se previenen para defenderse unas de otras. La justicia social se impone en una lucha cruenta, sistemática y difícil; y el hombre tampoco abdica de su egoísmo con respecto al hombre, y el principio de fraternidad humana no impide que existan códigos penales y cárceles públicas.

Con esto quiero decir que no está en mi ánimo restar en modo alguno mi reconocimiento a un principio moral o ético de ninguna especie. No puedo estar espiritualmente en contra de este principio que preconiza el alejamiento, por la posible interferencia, entre el periodista y el funcionario público. Pero análogamente a lo que expresaba hace un momento, con otros ejemplos en lo que respecta a aplicar este principio ideal que formulamos a la realidad concreta del medio social argentino —ya que estamos dando una ley positiva— afirmo, señor presidente, que ese principio no puede tener rígida aplicación. No diré que sea un mero desiderátum y que no puede ser alguna vez alcanzable, pero sostengo que corresponde a un estado social muy evolucionado, que ni nuestro pueblo, ni acaso ningún pueblo de la tierra, ha podido alcanzar todavía.

Aplicar ese principio cerradamente, por el mero afán de declarar un bello principio, significaría cometer, como dije al comienzo, una flagrante injusticia, cerrar violentamente las puertas de posibilidades legítimas a un sinnúmero de hombres. Y creo aun más: que ello tendrá efectos contraproducentes a los que se propone la legislación sobre el periodismo. Significará desviar de su vocación periodística, de las que el país espera mucho, a hombres que habrán de entregarse a la burocracia por la burocracia misma o a otras actividades que compensen de mejor modo sus esfuerzos. Porque si es cierto que no sólo de pan vive el hombre, no es menos cierto que hasta en la más alta

oración cristiana, el Padre Nuestro, se pide a Dios el pan de cada día.

Creo que si sancionamos este artículo que debe contemplarse en correlación con el artículo 52 y siguientes de la ley que estamos considerando, privaremos que estos hombres reciban otra retribución que 200, 220 ó 250 pesos, con lo que vamos, en verdad, a conspirar contra el estímulo que tuere la vocación por la vida periodística.

De otra parte, no alcanzo a comprender claramente de qué modo puede gravitar sobre la orientación de los periódicos, sobre la emisión de las ideas, que, en definitiva, está a cargo de las jerarquías superiores de cada uno de los órganos periodísticos, el hecho de que empleados modestos, como lo son todos los que figuran en los primeros incisos del artículo 53 del estatuto, puedan tener cargos públicos que desempeñar paralelamente con éstos.

Sr. Reyes. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bustos Fierro. — Sí, señor diputado.

Sr. Reyes. — Yo le podría decir que sí, que gravitan. En el diario «El Día», cuando el periodista destacado en la casa de gobierno o en la municipalidad de La Plata, no publicaba las informaciones que le daba la Secretaría de Prensa de la casa de gobierno o la de la municipalidad, le rebajaban el sueldo o lo despedían; y le decían a diario: mande otro redactor, que éste no sirve.

Si me permite otra aclaración, le diré, además, que no es la vocación lo que se desea cobrar ni pagar. Todos tiene vocaciones; pero si un ciudadano de la calle tuviera vocación para ser diputado, el gobierno no tendría por qué pagarle. Una cosa es la vocación y otra la profesión.

Sr. Bustos Fierro. — La observación del señor diputado Reyes podría ir acompañada de un sinnúmero de observaciones análogas, porque si nos vamos a detener en el examen de pequeñas cosas encontraríamos muchos argumentos para acumular a estas ideas; pero hay algo central que no puede ser objetado, algo notoriamente cierto, y es que la emisión de la opinión del órgano periodístico está a cargo de los funcionarios superiores que van del secretario de redacción en adelante. No se puede sostener en forma alguna que un aspirante, que un reportero, un cronista, un redactor o editorialista, etcétera, puedan, realmente, ser los que orienten la prédica del periódico al cual pertenecen.

No vemos inconveniente de ninguna especie en que, por lo menos, a estos empleados de las categorías modestas del periodismo se les faculte para el ejercicio simultáneo de un empleo público.

Por otra parte, aun admitiendo que estas conjeturas no se realicen, es decir, que en vez de estimular se castigue la vocación periodística,

pienso que se trataría de un eventual peligro que resulta neutralizado por el control de la opinión pública, y por otros factores como es el de la propia presión del medio cultural en que se vive, e incluso por la orientación del estado de derecho en que vivimos. En cambio, si vemos como una alarmante y flagrante injusticia, mantener el artículo tal como ha sido proyectado, porque significa manifiestamente coartar, o exigir al menos, una abnegación extraordinaria al periodista para dedicarse a su vocación con exigencias de apostolado.

Por estas razones, termino solicitando de la comisión la eliminación total de este artículo, para que, cuando consideremos el estatuto del personal civil de la Nación, con buena lógica jurídica, entremos a examinar las razones que hacen compatible el ejercicio de la función pública con otras actividades; o, por lo menos, si este criterio no prosperara, se haga un distingo que constituiría, en este caso, en aplicar solamente las disposiciones de la incompatibilidad a las categorías de personal comprendidos en los incisos h), i), j) y k), vale decir, que comprenda a aquellos hombres del periodismo orientadores de la prédica del órgano que realmente puedan, aunque remotamente, ser pasibles de una coacción moral por parte de los funcionarios del Estado, y que, por otra parte, están retribuidos en sus tareas específicas con emolumentos que les permiten vivir exclusivamente dedicados a esa tarea.

Entre tanto, dejo salvado mi criterio personal. Considero un grave error sancionar el artículo tal como viene proyectado, solamente en nombre de la aplicación rígida de un principio que no debe tener tal sentido, y que importaría, en todo caso, consagrar un mal mayor: la injusticia frente al otro caso, que sería el mal menor.

Sr. Orozco. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Reynés. — Quería decir dos palabras...

Sr. Presidente (Guardo). — El señor diputado iba a hacer una aclaración en nombre del bloque.

Sr. Rubino. — Anoto, señor presidente, la diferencia de proceder en este caso, con la de la sesión anterior, cuando pedí la palabra. Dejo así fundada mi observación a la Presidencia por la manera de dirigir el debate...

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Reynés. — Como muy bien lo ha informado el señor diputado Bustos Fierro, el bloque de la mayoría me encomendó pedir a la Cámara el retiro del artículo 33, que se está discutiendo. La circunstancia de haber sido postergado en el uso de la palabra —y no va en esto un cargo a la Presidencia—, me ha impedido hacerlo, y

he de confirmar ese pedido con breves consideraciones, porque el señor diputado Bustos Fierro, al fundar su voto, ha hecho algunas de carácter personal que fundamentan, a la vez, el punto de vista del bloque de la mayoría.

Personalmente soy partidario de la incompatibilidad. Recuerdo que en este Parlamento se trató por primera vez, hace más de treinta años, la incompatibilidad entre el ejercicio del periodismo y el del empleo público. Fué el doctor Repetto quien planteó la cuestión en esta Cámara denunciando la presencia, en altos cargos de la administración nacional, de más de cuarenta redactores de un gran diario de esta Capital. En esa oportunidad se consideró el hecho como una inmoralidad. Yo creo que lo que perseguía ese legislador era establecer un principio ético, dividir la función pública de las tareas periodísticas. Pero evidentemente, para llegar a esa incompatibilidad, yo creo que el Parlamento ha de legislar antes, acerca de las incompatibilidades de sus propios miembros y de esa manera el Parlamento tendría más autoridad para crear incompatibilidades en otras actividades.

El señor miembro informante de la mayoría, diputado Albrieu, ha recordado una declaración del último congreso de la Federación Argentina de Periodistas, vinculada con esta cuestión. Ese congreso votó una expresión de anhelos en el sentido de propender a la elevación de la situación material de los periodistas, para de esa manera dar categoría a la profesión y procurar, por ese medio, que los periodistas se dediquen exclusivamente a ella. La federación está en esa tarea de propugnar mayores mejoras con la sanción del estatuto que estamos considerando. Esa expresión de anhelos la ha recogido la comisión y la incorporó como un artículo del despacho. Consultada la Federación Argentina de Periodistas, como era natural, dió su asentimiento para que fuese incorporado ese artículo; pero tal como han sido planteadas las cosas en este recinto, voy a solicitar el retiro de este artículo, entendiendo, como bien lo expresó el señor diputado Bustos Fierro en la parte final de su exposición, que por ahora podría postergarse la inclusión de esta incompatibilidad y dejarla para cuando se trate el estatuto del personal del servicio civil de la Nación.

Con estas palabras dejo formulado el pedido de retiro del artículo 33 en nombre del bloque de la mayoría.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Señor presidente: debo hacer previamente una pequeña rectificación a las palabras de mi distinguido colega el diputado Reynés, en cuanto a que la comisión ha tomado el artículo de la resolución del VII Congreso de la Federación Argentina de Periodistas.

En una sesión pasada dije que al entrar a estudiar el decreto ley por el cual se disponía un régimen especial para los periodistas profesionales, pedimos a las empresas patronales periodísticas y a la federación sus opiniones sobre el mismo, y la federación, por conducto de sus representantes, solicitó la inclusión de este artículo, que le ha parecido a la comisión, en medio de todas las otras disposiciones de orden económico, indispensable para levantar el nivel ético del periodista.

Comprendo perfectamente la posición de mi bloque, puesto que con ello se quita a periodistas que militan políticamente en la misma corriente a que yo pertenezco, la posibilidad del acceso a la función pública, pero debo declarar que tengo para mí —y en eso creo que soy perfectamente solidario con el excelentísimo señor presidente de la Nación— que a la corriente revolucionaria se entra por convicciones firmes y no por dádivas ni por puestos públicos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

La corriente revolucionaria, si hemos de entenderla en su verdadero alcance, no puede tener en cuenta intereses menguados, ni tampoco venir a hacer lo que hemos querido que terminara de una vez por todas en nuestra patria: el arraigo en el puesto público de cuantos nos acompañan en las reivindicaciones sociales.

Quiero recordar otro presupuesto necesario de este artículo: las razones que fundamentan todas las leyes de jornada de trabajo.

La ley 11.544 establece la jornada de 8 horas y la semana de 48; para las tareas insalubres 6 horas diarias y 36 semanales. Si al periodista en su función de trabajador, se lo toma como que realiza una tarea insalubre, puesto que se limita su jornada a 6 horas diarias y a 36 semanales, no podemos admitir que cumpla nuevos horarios, por una razón de higiene industrial. Por sobre los intereses actuales equivocados del mismo periodista que desea el acceso a la función pública, debemos cuidar su salud física, tratando de que no trabaje más de lo que la ley entiende que es suficiente, porque en caso de rebasar el límite la fatiga afecta su salud.

Por esas razones, mantenemos la redacción del artículo.

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

La minoría también va a mantener íntegramente el artículo con las modificaciones propuestas por el señor diputado Mosset Iturraspe y el señor diputado Rumbo.

Las exposiciones del señor diputado Guillot y demás diputados de su sector no nos han convencido. No he querido dar al debate sobre este artículo un sentido político, pero evidentemente lo tiene; y para que la Cámara lo aprecie se ha referido a ese aspecto el señor diputado Albrieu, que pertenece al sector oficialista.

No concebimos, señor presidente, al joven soñador, de que nos hablaba el señor diputado por la Capital, a la pesca de un empleo público. Consecuentes en esto con la opinión de los propios periodistas vamos a votar por el mantenimiento del artículo. No se me oculta que hay hombres que aspiran a que los periódicos sean verdaderas sucursales de las oficinas públicas. Nosotros no nos vamos a prestar a esa política.

Sr. Orozco. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Guillot. — Pido la palabra para una aclaración. Ruego al señor diputado Orozco que formule su moción después de la brevísima aclaración que voy a hacer.

Sr. Orozco. — Muy bien.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Guillot. — No habría pedido nuevamente la palabra si no hubiese escuchado las manifestaciones que acaba de hacer el señor diputado por la Capital.

Afirmo que no hay en esto nada político. Integro una bancada de ciento ocho diputados adictos al gobierno, que hemos tenido en contra a todo el periodismo antes, durante y después de la campaña electoral. Si fuera cierto lo que afirma el señor diputado por la Capital, si fuera cierto que vamos buscando un periodismo oficialista, yo pregunto cómo es posible que, ocupando cargos públicos tan grande número de periodistas, hayamos tenido y tengamos —y seguiremos teniendo mientras los periodistas no piensen de otro modo— a los grandes órganos de opinión en contra de la representación que integramos.

Luego, es un recurso de mala política parlamentaria hacer esa temeraria afirmación. No es posible sostener que los diputados de la mayoría, que tenemos en contra a todo ese sector del periodismo del país, estamos buscando hacer de este punto de las incompatibilidades una cuestión política, porque el hecho material está demostrando la inexactitud de la afirmación del señor diputado por la Capital.

Sr. Frondizi. — La afirmación política la ha hecho un compañero de su sector. Yo no me he referido a ello, pero ya que el señor diputado lo ha dicho...

Sr. Guillot. — Es exacto lo que afirmo.

Sr. Frondizi. — ... le ratifico que el gobierno está en una política de captación de toda la prensa del país. Y eso lo sabe perfectamente bien el señor diputado.

Sr. Presidente (Guardo). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Orozco. — Teniendo en cuenta que recién estamos en el artículo 33 y que restan considerar 52 artículos de este despacho, hago moción de

orden de que se cierre el debate sobre el artículo 33 y se vote.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a llamar para votar.

Sr. López Serrot. — Le anticipo al señor diputado que me va a escuchar en otra ocasión y le voy a demostrar cómo se está coaccionando a los empleados nacionales.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la moción de orden de cerrar el debate.

—Resulta afirmativa de 45 votos; votan 81 señores diputados.

Sr. Bustos Fierro. — Pido votación nominal del artículo 33.

Sr. Guillot. — Con respecto al artículo 33 pido votación nominal.

Sr. Presidente (Guardo). — Previamente se va a leer el artículo.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Artículo 33: «Es incompatible el desempeño de la función periodística con la del empleo o función pública de carácter permanente y con la del empleo en empresas concesionarias de servicios públicos.» Sigue el texto impreso.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a rectificar nominalmente.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Secretario González). — Sobre un quórum de 90 señores diputados han votado por la afirmativa 51 y por la negativa 39 señores diputados.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Albrieu, Alvarez (N.), Aráoz, Argaña, Balbin, Bertini, Bonazzola, Busaniche, Candiotti, Córdoba, Cufre, del Carril, Díaz Colodrero, Errecart, Fajre, Ferrer, Frondizi, García Quiroga, Giménez Vargas, González Funés, Klix López, Lareo, Lencinas, Liceaga, López Serrot, Mac Kay, Maineri, Mántaras, Martínez Guerrero, Martínez Luque, Moreno, Mosset Iturraspe, Orozco, Ottonello, Pastor, Pérez de la Torre, Pomar, Pueyrredón, Ravignani, Repetto, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rubino, Sammartino, Santander, Solanet, Tommasi, Toro, Uranga y Zinny.

—Votan por la negativa los señores diputados: Alvarez Pérez, Allub, Arévalo Cabeza, Arias, Ayala López Torres, Ayerbe,

Bagnasco, Bustos Fierro, Cámara, Casas Nobiega, Corvalán, Decker, de la Torre, Díaz, Díaz de Vivar, Dri, Fernández (B. S.), Ferrando, Garay, García, Guillot, Lasciar, Letamendi, Malecek, Mariategui, Messina, Osinalde, Palacio, Pasquini, Perea, Pontieri, Raña, Reynés, Rossi, San Millán, Sarmiento, Tesorieri, Urdapilleta y Visca.

Sr. Bustos Fierro. — De conformidad al resultado que ha dado la votación y coincidente con las palabras que he pronunciado precedentemente, propongo un agregado a este artículo, que dice así: «Esta disposición sólo es aplicable a los periodistas comprendidos en los incisos h), i), j), y k) del artículo 53.»

Sr. Frondizi. — Implica una reconsideración del artículo.

Sr. Presidente (Guardo). — El señor diputado lo propone como un agregado.

Sr. Frondizi. — Es una reconsideración. Me atengo al reglamento y no a la calificación que le da el señor diputado. El señor diputado pretende, por vía de un agregado, rectificar al artículo casi totalmente.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene razón el señor diputado. Como la proposición del señor diputado modifica el alcance del artículo, importa una reconsideración.

Sr. Bustos Fierro. — No entiendo que sea así. El artículo 33 fija una norma de carácter general que se refiere a todos los periodistas. Dentro del propio texto legal se pueden fijar todas las excepciones que se quieran. Este criterio es perfectamente coincidente con los antecedentes legislativos que pueden existir entre cualquier materia.

Sr. Presidente (Guardo). — Lo que el señor diputado propone restringe el sentido de la votación que se acaba de hacer.

Sr. Bustos Fierro. — Simplemente regla hasta dónde la disposición propuesta ha de regir.

Pido al señor presidente consulte a la Cámara.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Reynés. — Me voy a oponer a la modificación que propone el señor diputado por Córdoba, porque entiendo que debe subsistir el principio de la incompatibilidad y no permitirse la acumulación a unos y prohibirla a otros.

En cambio, voy a proponer este agregado: después de las palabras «es incompatible el desempeño de la función periodística con la del empleo público», que se diga: «Esta disposición, que regirá a partir del 1º de enero de 1947, no será aplicable a los que a la fecha de la promulgación de esta ley se encuentren en la situación de este artículo».

Sr. Guillot. — Habría dos gremios de periodistas: privilegiados y no.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Frondizi. — En cuanto a la proposición del señor diputado por Córdoba, sostenemos que se trata de una reconsideración. Es, evidentemente, una forma indirecta de pretender alterar el resultado de la votación nominal que ha hecho la Cámara; y, naturalmente, nos vamos a oponer a esa modificación, porque estamos defendiendo el principio general de la incompatibilidad entre la función pública y la profesión de periodista.

También nos vamos a oponer a la modificación indicada por el señor diputado Reynés. El artículo 33, en su última parte, deja perfectamente a salvo la situación de los periodistas que son actualmente empleados públicos. No hay por qué dar la posibilidad de que en este mes se hagan nombramientos.

La legislación debe ser una cosa seria, y esto —sin ánimo ofensivo—, no es serio. Si el Poder Ejecutivo desea nombrar a algunos periodistas en la función pública, que los nombre antes de que esta ley tenga sanción.

Sr. Bustos Fierro. — Pido la palabra para aclarar, respecto de las que acaba de pronunciar el señor diputado preopinante y como autor de la iniciativa.

No creo que me alcance la parte final de lo dicho por el señor diputado Frondizi, pero es bueno que diga que el agregado que he propuesto, así como el que había hecho anteriormente, son cosas serias, como lo son todas las que traigo a esta Cámara, donde nunca he venido a actuar de cómico, sino como diputado de la Nación.

Voy, pues, a referirme concretamente a la oposición que plantea el señor diputado preopinante, y reitero lo que manifesté: el artículo 33 da una norma de incompatibilidad que es un principio general, el cual puede ser reglado por el propio texto de la ley en la forma que lo estime conveniente, declarando cuáles son las categorías de funcionarios o periodistas que son alcanzados por él. No importa una reconsideración. Reconsiderar significa volver a considerar totalmente un asunto. En cambio, este agregado se limita a eliminar una categoría de modestos periodistas, que son fundamentalmente los que he tenido en cuenta cuando formulé mi moción anterior.

Sr. Presidente (Guardo). — La Cámara resolverá si se trata de una reconsideración o de un agregado. El voto afirmativo expresará que se trata de una reconsideración.

—Resulta afirmativa de 48 votos; votan 84 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar si se reconsidera el artículo.

Sr. Guillot. — Pido la palabra, para referirme a la moción.

Sr. Presidente (Guardo). — Se está votando, señor diputado.

—Resulta negativa de 53 votos sobre 84.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar ahora la proposición del señor diputado Reynés.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado por la Capital propone que la segunda frase del artículo 33 sea redactada así: «Esta disposición empezará a regir desde el 1º de enero de 1947, y no será aplicable a los que a la fecha de la promulgación de esta ley se encuentren en la situación que este artículo prevé.»

Sr. Presidente (Guardo). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Frondizi. — Nosotros no aceptamos.

Sr. Albricu. — La mayoría de la comisión acepta.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la redacción propuesta por el señor diputado por la Capital, aceptada por la mayoría de la comisión.

—Resulta negativa de 48 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Guillot. — La Cámara ha dividido el gremio de periodistas en dos partes: los de la Unión Democrática quedarán en los cargos públicos y los de la revolución...

Sr. Frondizi. — No es exacto.

—Los señores diputados Guillot y Frondizi hablan simultáneamente y suena la campana.

—Sin observación, se da por aprobado el artículo 34 del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 35 del nuevo estatuto.

Sr. Rumbo. — Pido la palabra.

Voy a proponer un agregado, señor presidente, a este artículo que se refiere al descanso anual. El sentido del agregado es establecer una diferenciación entre los periodistas que cumplen funciones habitualmente diurnas y los periodistas que cumplen funciones habitualmente nocturnas.

Por ello es que propongo el inciso siguiente, redactado así: «Disfrutarán de un descanso mayor de tres días, cinco días y siete días, cuando realizaren tareas habitualmente nocturnas.»

Porque los tres incisos precedentes a), b) y c) especifican quince días de descanso para aquellos cuyos servicios no excedan de diez años; veinte días para los que tengan más de diez años, y treinta días para los que tengan más de veinte años.

El sentido de este inciso que propongo se agregue, es para esas tres categorías, cuando realizaren trabajos o tareas habitualmente nocturnos acordándoles de esa suerte un descanso ampliatorio, a efectos de diferenciar el tipo de tareas, ya sean diurnas, ya sean nocturnas.

Sr. Presidente (Guardo). — No debe ir como inciso, sino como apartado, porque se refiere a los tres incisos.

Sr. Rumbo. — Sí, señor presidente. Se refiere a los tres incisos.

Sr. Rubino. — Pido la palabra.

Propongo a la comisión que en el artículo 35, de los incisos b) y c) haga uno solo. Quedaría de esta manera: «a) Quince días hábiles cuando la antigüedad en el servicio no exceda de diez años; b) Treinta días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de diez años». Vale decir, suprimir la distinción en la antigüedad entre veinte años y mayor de veinte años.

El fundamento de esta modificación que solicito es fácil de comprender. El gremio de los periodistas es el que más trabaja en el año; no hay para él sábado inglés, semana santa, días de carnaval, etcétera. Podemos calcular que fácilmente trabaja dos meses más que cualquier otro gremio. De tal manera que darle treinta días de vacaciones cuando su antigüedad es de diez años, sin hacer otras distinciones, es de justicia evidente para este gremio.

Pido, pues, a la comisión, que acepte esta modificación, que tiende a dar a los periodistas mayor número de días de vacaciones como compensación por el mayor trabajo que efectúan durante el año.

Sr. Albricu. — Pido la palabra.

En el artículo anterior ya se establece que el horario de trabajo será de 36 horas semanales para el gremio de periodistas. En este artículo 35 hemos hecho un régimen de excepción con respecto a la ley 11.729, que establece un período de descanso de diez días para los que tengan menos de cinco años de antigüedad, ya que se otorgan directamente quince días hábiles para los que tengan una antigüedad menor de diez años.

Para no establecer un régimen notoriamente desigual con respecto a los demás trabajadores, la comisión no acepta la sugerencia del señor diputado por Santa Fe.

En cambio, reconoce plausible y lógica la sugerencia del señor diputado Rumbo, que acepta.

Sr. Candioti. — Pido la palabra para solicitar de la comisión una aclaración respecto al artículo que se está discutiendo.

Dice la parte general del articulado que estas disposiciones se aplicarán considerando el servicio activo, y en los incisos a), b) y c) habla de antigüedad en el servicio de diez años, etcétera. Yo preguntaría si esa antigüedad se refiere —como creo que es así, pero habría que aclararlo— a las órdenes de un mismo empleador.

Sr. Albricu. — El servicio activo se refiere a la remuneración que debe percibir el periodista en los períodos de descanso, y que será la misma que percibe cuando está prestando servicio activo. El artículo está redactado en esta forma, y se debe interpretar —como dice un artículo anterior que da la regla de interpretación— en la misma forma que la ley 11.729, vale decir, al servicio de la misma empresa.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 35 del nuevo estatuto, con el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital, que ha aceptado la comisión.

—Resulta afirmativa de 61 votos; votan 81 señores diputados.

—Sin observación, se dan por aprobados los artículos 36 a 40, inclusive, del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 41.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado Santander propone agregar como segundo párrafo el siguiente: «La resolución del empleador podrá ser recurrida por el empleado dentro de los cinco días de notificada, ante la comisión paritaria. Si la resolución fuera revocada, el empleador deberá pagar íntegramente las remuneraciones devengadas.»

Sr. Santander. — Pido la palabra.

Con el propósito de que este estatuto en definitiva se sancione, porque estamos escuchando muy buenas palabras, pero algunos de los diputados que se han enternecido con el tema, ni siquiera están presentes en el momento que corresponde votar, he de decir que el agregado que proponemos como artículo 41 es el mismo que se estableció dentro del régimen legal de la industria frigorífica y que la Cámara votó. No daré otras razones para no caer en el pecado que censuro.

Sr. Albricu. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 41 del nuevo estatuto, con el agregado aceptado.

—Resulta afirmativa de 71 votos; votan 81 señores diputados.

—En consideración el artículo 42 del nuevo estatuto.

Sr. Candiotti. — Pido la palabra.

El artículo 42 se refiere a los periodistas que prestan servicio militar y habría que armonizarlo con el artículo 19; pero yo voy a proponer la sustitución del artículo 42, por las siguientes consideraciones.

Aquellos periodistas que han merecido la confianza popular y son elegidos para desempeñar cargos de concejales, o de legisladores provinciales o nacionales, son contemplados en el agregado que he de proponer. El periodista es un ciudadano que está en plena actividad pública y cívica; sus funciones, su carrera, motiva que adquiera una serie de conocimientos, generales unas veces y profundos otras, y, sobre todo, un gran conocimiento humano de la sociedad en que actúa. Por eso, cuando sus conciudadanos lo premian eligiéndolo para representarlos, en un concejo municipal o en una legislatura de provincia o en el Parlamento nacional, ese periodista de profesión, que generalmente es un hombre pobre, al terminar su mandato tiene que volver a orientarse en la vida. Por eso, voy a proponer que como los que son llamados a prestar servicio militar, los que son elegidos por el pueblo para representarlo, tengan el mismo derecho a reincorporarse al diario o periódico a que han pertenecido. En consecuencia, propongo el siguiente texto: «Los periodistas conservarán su empleo cuando sean llamados a prestar servicio militar, o movilizados, o cuando sean elegidos para desempeñar funciones representativas municipales, provinciales o nacionales hasta treinta días después de terminado el servicio o el mandato.»

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Reynés. — Personalmente voy a apoyar la proposición del señor diputado Candiotti, si bien entiendo que las funciones electivas pueden permitir al electo desempeñar tareas periodísticas, que no serían incompatibles, si el tiempo le proporcionase esa facilidad. Con esta salvedad, voy a apoyar la inclusión del agregado.

Sr. Albrieu. — La comisión acepta, pero no como sustitución del artículo 42, sino como un agregado al mismo, estableciendo lo siguiente: «Esta disposición regirá también para las personas que detentan cargos electivos.»

Sr. López Serrot. — Pero el agregado que propone el señor diputado Albrieu en principio hace que pueda suponerse que existe contradicción con un artículo ya aprobado, por el que se declara incompatible dichas funciones con el empleo. La función parlamentaria o el desempeño de una concejalía o de cualquier representación popular en el orden nacional, provincial o municipal no es incompatible con el

puesto. Habría que decir, entonces, expresamente, en ese agregado que el artículo alcanza al periodista que hubiere dejado de desempeñar su puesto como consecuencia del mandato y que, por el ejercicio de éste, no es imperiosamente necesario que deje de desempeñar su puesto.

Sr. Albrieu. — La razón que adujo el señor diputado Candiotti se refería al caso de los periodistas de provincia, por ejemplo, que vienen a ejercer un mandato en la Capital Federal. En esa situación no podrían ejercer el periodismo en su provincia y, a la vez, el cargo electivo.

De tal manera que este artículo no comprende la incompatibilidad del artículo 19. No hace más que disponer que debe guardársele el puesto para los casos posibles de que no puedan ejercer el periodismo mientras desempeña el cargo electivo.

Sr. Díaz. — Entiendo que el periodista que ocupa un puesto electivo no puede desempeñar el cargo de periodista. Creo que ésa es la tesis que sustentaba el diputado Candiotti.

Sr. Candiotti. — No, señor diputado. Mi proposición no tenía por objeto establecer una incompatibilidad. Absolutamente.

Creo que el representante popular, concejal o diputado, tiene indiscutible derecho a ejercer funciones periodísticas. En el caso de que por lo abrumador de la tarea o por ausencias frecuentes de la localidad no pueda desempeñar la función periodística, cuando el empleador diga que lo va a reemplazar transitoriamente o cuando el mismo periodista manifieste, por voluntad propia, que no puede desempeñarse con la dedicación necesaria, debe conservársele el empleo.

No hay un propósito limitativo. Es un derecho adquirido y debe reservarse el puesto para cuando termine el mandato. Como a los dos años caduca la función periodística, es conveniente legislar en ese sentido.

Sr. López Serrot. — Es necesario encarar debidamente el punto. Si se hace el agregado en la forma propuesta originariamente, se equiparará el caso del periodista que cumple una función electiva a la del movilizado o convocado para el servicio militar, que no realiza una actividad voluntaria. Si no se hace la aclaración expresa parecerá que el periodista, elegido para un cargo popular, dejará automáticamente de desempeñar su función de periodista.

Hay que hacer la aclaración expresa. No basta la simple manifestación hecha en el debate, sino que debe estar contenida expresamente en el texto de la ley.

Sr. Díaz. — Las palabras del señor diputado López Serrot demuestran que ha votado mal anteriormente. Si el periodista no puede ocupar un puesto, menos puede ocupar un puesto legislativo.

Sr. Rubino. — Eso es confundir empleo público con función pública, que son conceptos completamente distintos.

Sr. López Serrot. — Quiere decir que el señor diputado toma esto como un empleo.

Sr. Candiotti. — Que se lea el texto por Secretaría.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — De acuerdo con las modificaciones aceptadas por la comisión, el artículo 42 quedaría en la siguiente forma: «Los periodistas conservarán su empleo cuando sean llamados a prestar servicio militar o movilizados o convocados especialmente, hasta treinta días después de terminado el servicio. Esta disposición regirá también para quienes desempeñen cargos electivos, si no pudieran o no quisieran ejercer el periodismo.»

Sr. Frondizi. — Creo que con la redacción del artículo en esa forma y con las aclaraciones hechas en nombre de la comisión, queda perfectamente establecido que no existe incompatibilidad entre la función de legislador y la de periodista.

Sr. Albricu. — Para precisar el concepto puede agregarse después de «cargos electivos», las siguientes palabras: «durante el término de su mandato».

Sr. Frondizi. — No hay inconveniente.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Bustos Fierro. — Encuentro en la redacción del artículo 42 una impropiedad inicial que no es solamente de elocución, sino que —y a eso va el sentido de mi observación— puede acaso oscurecer el concepto y dar lugar a confusiones o dificultades. El texto dice: «Los periodistas conservarán su empleo», etcétera, y evidentemente el empleo no se conserva, porque «el empleo» supone derechos y obligaciones correlativas permanentes que no se pueden poner en función mientras dura el impedimento. Lo que se conserva es el derecho de reintegrarse al empleo. De modo, entonces, que, ya sea por vía de modificación del texto, o por vía de aclaración que puede formular la comisión respectiva, creo conveniente que esto quede perfectamente establecido: no es el empleo en verdad lo que se conserva, sino el derecho de reintegración al empleo.

Sr. Frondizi. — No deseo seguir al señor diputado por Córdoba en la disquisición que ha hecho, pero es evidente que no puede conservarse el empleo, en el sentido que le da el señor diputado, si está prestando servicio militar. Pero en otro aspecto, el periodista conserva el empleo y lo único que no tiene es el derecho a retribución. No vamos a entrar en una discusión sobre este asunto; no se trata de reintegrarse al empleo; conserva la integridad de su derecho y lo único que no tiene es el derecho a la retribución.

Sr. Ravignani. — Siempre es titular del empleo.

Sr. Bustos Fierro. — Deseo que quede perfectamente aclarado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 42 en la forma leída, y con las palabras «durante el término de su mandato» a que se ha referido el señor diputado por La Rioja.

—Resulta afirmativa de 74 votos; votan 81 señores diputados.

—En discusión el artículo 43 del nuevo estatuto.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Quiero simplemente hacer una aclaración interpretativa para cuando se aplique este artículo 43 en la parte final. En las observaciones hechas por la Federación de Periodistas se estableció con mucho acierto que en el cómputo de los sueldos, retribuciones por otros trabajos periodísticos, comisiones y viáticos, debían quedar incluidos los aumentos por antigüedad, porque podría suceder que por arte de contabilidad sólo se tomara en cuenta el sueldo básico. Entiende que los aumentos por antigüedad que vamos a votar más tarde deben incorporarse al sueldo y formar un solo sueldo.

—Se aprueba el artículo 43 del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 44.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En el artículo 44 el señor diputado Santander propone suprimir la palabra «reiterada».

Sr. Ravignani. — Apoyado.

Sr. Visca. — Estamos de acuerdo.

Sr. Rumbo. — Todo el sector adhiere.

Sr. Albricu. — La comisión acepta.

Sr. Reynés. — Deseo hacer una pequeña reclamación a la Presidencia, porque he pedido la palabra para intervenir en diversos artículos y me encuentro con que el señor secretario se adelanta al pedido de la palabra, dando cuenta de modificaciones propuestas.

Sr. Santander. — Aquí no estamos en un juego de toma y daca. He presentado —después que se trató el proyecto en general— todas las modificaciones que me ha sugerido el proyecto. Si no he hablado, ha sido para no perder tiempo pronunciando discursos inútiles. Lo que interesa es votar. Que haya estatuto.

Sr. Reynés. — Pero por el reglamento ha debido concedérseme previamente la palabra, desde que la tenía solicitada.

Sr. Santander. — Tómese todos los méritos, atribúyase toda la gloria que quiera en la sanción de esta ley.

Sr. Presidente (Guardo). — El señor diputado Reynés no se ha referido al señor diputado, sino a la Presidencia.

Sr. Santander. — Pero está haciendo un juego de palabras y yo reacciono con razón justificada, porque observo que se está achicando este asunto.

Sr. Presidente (Guardo). — Al señor diputado le he dado la palabra en los artículos respecto de los cuales se había anotado.

Sr. Reynés. — He pedido la palabra, por ejemplo, en casos como éste en que estoy coincidiendo con las reformas que propone el señor diputado por Entre Ríos...

Sr. Presidente (Guardo). — El señor diputado Santander presentó su planilla de modificaciones mucho antes que las del señor diputado. Por eso se leen primeramente las del señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Santander. — Yo he tenido la prudencia de no hablar en cada caso particular, para que sancionemos la ley.

Sr. Reynés. — Puedo estar equivocado en la interpretación del reglamento, pero como he pedido la palabra, considero que es previo concedérmela con relación a la modificación que he propuesto.

Sr. Santander. — No se trata aquí del orden de la palabra, porque por mi parte no he hablado, pero he cumplido con el reglamento pesentando oportunamente las modificaciones.

Sr. Presidente (Guardo). — Se dará por aprobado el artículo 44 del nuevo estatuto, eliminando la palabra «reiterada».

—Se da por aprobado.

—Se aprueba asimismo el artículo 45.

• —En consideración el artículo 46.

Sr. Ravignani. — Quiero aclarar que este artículo viene a substituir el antiguo artículo 40 del estatuto que fué ratificado, e introduce un principio interesante propuesto por la Federación de Periodistas, en donde se establece que todo empleado que tenga antigüedad superior a cinco años, tendrá derecho, en caso de retiro voluntario, a una bonificación de medio mes de sueldo por cada año.

Posiblemente alguien pueda creer que éste es un favor excesivo; pero no es así, pues es una práctica en todas las empresas; cuando un empleado se ha desempeñado con gran eficacia y se retira después de haber beneficiado con su esfuerzo a la entidad, lo menos que puede reconocérsele es esa remuneración compensatoria de su esfuerzo.

Ese es el concepto con el cual la comisión lo aceptó. Es un principio de ética.

—Se aprueba el artículo 46 del nuevo estatuto.

—Sin observación se aprueban los artículos 47 y 48.

—En consideración el artículo 49.

Sr. Candiotti. — Pido la palabra.

Entre las circunstancias que comportan riesgos, este artículo se refiere a los viajes a través de países inseguros. Advierto que puede tratarse sólo de regiones de un país, o de regiones que no formen parte de ninguno, como el caso de una región polar. Y habría que suprimir la mención de los «terremotos», porque generalmente cuando a un periodista se le encomienda una misión a la zona afectada, el terremoto ya pasó... De modo que la peligrosidad ya no existe. Por lo demás, estarían comprendidos en el concepto de regiones inseguras.

También habría que contemplar el caso de concurrencia a demostraciones científicas que supongan peligro para la salud o la vida. Actualmente, en el mundo civilizado se realizan experiencias sorprendentes en las que hay esos riesgos. Estamos legislando para el futuro y seriamente. Debemos, pues, prever las contingencias que la ciencia y las inquietudes humanas puedan crear.

Sr. Albrieu. — El principio general de este artículo está dado por la parte primera: cada vez que un periodista sea encargado de una misión que comporte riesgos excepcionales, como ser... Vale decir que es un artículo ejemplificativo. No es posible enumerar todo lo que pueda importar un riesgo. Por otra parte, hacemos un estatuto que después será reglamentado.

En cuanto a la supresión de la palabra «terremotos», la aceptamos porque no modifica el concepto del artículo.

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

Naturalmente que compartimos las palabras del señor diputado Albrieu en cuanto al concepto amplio sobre las misiones que importen riesgos profesionales. El señor diputado Rubino observaba, con razón, que puede importar riesgo excepcional para un periodista concurrir a un mitin opositor.

Deseo proponer un agregado en la parte final del artículo, pues evidentemente se incurre en una omisión. La parte final se refiere al modo de calcular la indemnización en el caso de que la invalidez no sea total y permanente, estableciendo que se tendrá en cuenta el lucro cesante y los gastos de asistencia médica. Pero evidentemente es preciso agregar como criterio «el grado de incapacidad».

De modo que el último párrafo debería quedar redactado así: «Cuando no se origine la

invalidez total y permanente o la muerte, la indemnización será calculada teniendo en cuenta el grado de incapacidad, el lucro cesante y los gastos de asistencia médica.»

Sr. Albrieu. — Al decir la primera parte del artículo que los periodistas están comprendidos en la ley 9.688, se sobreentiende que se tiene en cuenta la incapacidad, porque el artículo 8, inciso c) de la ley 9.688, dice que en caso de incapacidad parcial y permanente se le abonará al accidentado una indemnización igual a mil veces la reducción diaria del jornal.

El concepto estaba implícito, por lo cual la comisión acepta el agregado propuesto.

Sr. Uranga. — Pido la palabra.

Voy a proponer a este artículo un pequeño agregado, que solicito acepte la comisión.

Al principio del artículo, en donde dice «Los periodistas están comprendidos en la ley 9.688», interponer las palabras «cualquiera sea su remuneración», quedando entonces redactado en esta forma: «Los periodistas, cualquiera sea su remuneración, están comprendidos en la ley 9.688.»

Saben los señores diputados que la ley 9.688 ampara a los empleados y obreros que perciben hasta tres mil pesos por año.

Sr. Albrieu. — Seis mil pesos.

Sr. Uranga. — La que alcanza esa cifra es la indemnización, señor diputado. Son dos cosas distintas: una la de los obreros que están dentro del régimen de la ley 9.688, es decir, obreros que ganan hasta nueve pesos y fracción por día, llegándose así a la cantidad de tres mil pesos anuales; y otra, el máximo de la indemnización, que es de seis mil pesos.

De no hacerse el agregado que propongo, la gran mayoría de los periodistas quedarían fuera del régimen de la ley 9.688, de accidentes del trabajo.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿La comisión acepta?

Sr. Albrieu. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer el artículo 49, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Artículo 49. — Los periodistas, cualquiera sea la remuneración que perciban, están comprendidos en la ley 9.688, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; pero cada vez que cada uno de ellos sea encargado de una misión que importe riesgos excepcionales, como ser, guerra nacional o civil, revoluciones, viajes a través de regiones o países inseguros, deberá estar asegurado especialmente por el empleador, de modo que quede a cubierto de los riesgos de enfermedad, invalidez o muerte.»

El segundo apartado no contiene modificaciones.

El último apartado dice: «Cuando no se origine la invalidez total y permanente o la muerte, la indemnización será calculada teniendo en cuenta el grado de incapacidad, el lucro cesante y los gastos de asistencia médica.»

Sr. Presidente (Guardo). — Si no se observa, se dará por aprobado el artículo 49 del nuevo estatuto, con las modificaciones que se han enunciado por Secretaría.

—Se da por aprobado.

—Sin observación, se da por aprobado el artículo 50 del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 51.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra para una aclaración.

En este artículo se agrega un concepto nuevo respecto a la indemnización, en caso de muerte del periodista, al cónyuge, descendiente, etcétera. Es el concepto de la ley 11.729. Pero cuando no hay derechohabientes, el patrón o empleador, en realidad, no tiene por qué cargar con ninguna indemnización. A requerimiento de la federación, y considerando la comisión que era un proceder realmente equitativo y avanzado en la legislación, se ha introducido el último párrafo, que viene a beneficiar a la masa de los periodistas y que dice así: «En el caso de no existir beneficiarios, las indemnizaciones ingresarán a un fondo especial de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Periodistas, destinado a finalidades idénticas a las previstas por el artículo 10 de la ley 9.688.» Y se completa el concepto determinado que «a este fondo ingresarán también todas las multas que se apliquen por infracciones a la presente ley». Se trata de un avance en la legislación que habrá que introducir en las futuras leyes, porque lo consideramos fundamental.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Voy a expresar mi oposición al último párrafo del artículo 51. Creo que no hay razón alguna para establecerlo. Ya existe una Caja Nacional de Garantía, creada por la ley de accidentes del trabajo, con el propósito de pagar las indemnizaciones en los casos en que los patronos sean insolventes —que no son poco frecuentes—; y dado que los periodistas han sido incorporados al régimen de la ley de accidentes del trabajo, no veo por qué ha de existir una caja distinta a la que crea esta ley. Yo creo que si los periodistas están dentro del régimen general de la ley 9.688, deben también disfrutar de la Caja Nacional de Garantía que ella crea, de tal manera que cuando alguna empresa periodística caiga en la insolvencia y no abone las indemnizaciones, éstas serán abo-

nadas al periodista accidentado, al enfermo profesional, o al causahabiente en su caso, con los fondos de la Caja Nacional de Garantía.

No me explico qué fundamento especial puede haber para crear esta cajita, destinada a subvenir necesidades cuya atención ya está contemplada en la ley general de accidentes del trabajo, que ampara a todos los trabajadores.

En segundo lugar, no creo que esté justificado tampoco que se haga este fondo especial, con las multas provenientes de infracciones a las disposiciones de este estatuto, manejado por una sección sui generis creada en la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Periodistas.

Voy a solicitar, señor presidente, que la primera parte de este párrafo sea suprimida, por entender que la Caja Nacional de Garantía cubre suficientemente esos eventos, y, en segundo lugar, que el producido de las multas por infracciones al estatuto para los periodistas sea destinado al fondo escolar, nacional o provincial, según sea el domicilio de la empresa periodística infractora.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Albrieu. — La razón de crear esta caja especial es que, aunque la ley 9.688 rige para los periodistas, establecemos en este estatuto una diferencia notable con respecto a los demás trabajadores. Comenzamos por no poner límites a la retribución para tener derecho a la indemnización en caso de accidente. En segundo lugar, la ley 9.688 establece como límite máximo de indemnización, seis mil pesos, y en el estatuto nosotros fijamos la indemnización mínima en diez mil pesos. En esta forma vamos a desalojar fondos en beneficio del gremio de periodistas, que son los menos, en perjuicio de todos los demás trabajadores, que son muchos más. Esa es la razón que existe para crear la caja especial a la cual, para que no le falten fondos, le acordamos los provenientes de las multas por infracciones al estatuto.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 51 del nuevo estatuto, en la forma propuesta por la comisión.

—Se aprueba.

—Sin observación se da por aprobado el artículo 52.

—En consideración el artículo 53 del nuevo estatuto.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En este artículo el señor diputado Visca ha presentado una planilla de modificaciones.

Sr. Ravignani. — Hay un error material respecto del traductor: en vez de «50 pesos» debe decir «100 pesos».

Sr. Presidente (Guardo). — Se salvará oportunamente, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Reynés. — De acuerdo con lo que propuse, corresponde crear en el acápite A), y como inciso b), la categoría de archivero, con sueldo inicial de 280 pesos en la primera categoría. Habría que suprimir en el inciso a) las palabras «y archivero».

En el acápite B) se crearía en el inciso b) la categoría de archivero, con un sueldo mensual de 235 pesos. También suprimiríamos las palabras «y archivero» en el inciso a) de la segunda categoría.

Igualmente en la tercera categoría se suprimen esas mismas palabras y se crea la nueva calificación con la suma mensual de 215 pesos.

Además, correspondería incluir en la definición de cronistas a los cableros y dictafonistas, de acuerdo con lo que propuse anteriormente. En todas las categorías, los cargos de cablero y dictafonista irían en la calificación de cronista y con el sueldo correspondiente a esta calificación.

Sr. Visca. — Pido la palabra.

Oportunamente deposité en Secretaría una tabla de sueldos para su consideración por la Honorable Cámara.

Para abonar los aumentos de sueldos no voy a dar otras razones que las que ya expuse en otra ocasión.

La Cámara ha considerado hace pocos días los sueldos de los trabajadores de los frigoríficos —respecto de los cuales, además, se ha llegado a fijarlos por convenios entre las empresas y los obreros—, los que están muy por encima de los que se establecen en este despacho de comisión.

Entiendo que las empresas de primera, segunda y tercera categorías están en condiciones de pagar los sueldos que propongo, lo que, por otra parte, no significaría otra cosa que devolver en pequeña medida un complemento de los sueldos de hambre que han tenido los periodistas de nuestro país durante muchísimos años.

Por estas razones y otras que no escapan al elevado criterio de cada uno de los señores diputados, espero que la Honorable Cámara apruebe la escala de sueldos que he propuesto.

Sr. Presidente (Guardo). — Por Secretaría se va a dar lectura a la escala de sueldos que propone el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado Visca propone los siguientes sueldos para la primera categoría: aspirante, 300 pesos; reportero, 370 pesos; cronista, 480 pesos; redactor, etcétera, 650 pesos; para la categoría del inciso e), 750 pesos; para la del inciso f),

800 pesos; para la del inciso g), 900 pesos y para la del inciso h), 1.000 pesos.

En la categoría B): para el inciso a), 280 pesos; para el inciso b), 330 pesos; para el inciso c), 410 pesos; para el inciso d), 480 pesos; para el inciso e), 580 pesos; para el inciso f), 700 pesos; para el inciso g), 750 pesos, y para el inciso h), 800 pesos.

En la categoría C): para el inciso a), 260 pesos; para el inciso b), 300 pesos; para el inciso c), 350 pesos; para el inciso d), 400 pesos; para el inciso e), 450 pesos; para el inciso f), 500 pesos; para el inciso g), 550 pesos, y para el inciso h), 625 pesos.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Señor presidente: al redactar el proyecto de estatuto que estamos considerando, la comisión tuvo en vista no sólo el pedido de la Federación de Periodistas, sino también especiales fundamentos sobre política de salarios, especialmente en lo que atañe a la política que debe seguir el bloque a que pertenezco, que es la de elevar las remuneraciones hasta el nivel, en lo posible, del mínimo del costo de la vida. En ese sentido, sobre lo que se estimó como costo de la vida para fijar las remuneraciones del estatuto sancionado por el decreto ley dictado en 1944, hemos elevado las remuneraciones de acuerdo con los estudios hechos al dictarse el decreto 33.302. Vale decir, que la escala de sueldos está dada sobre una base seria. En el primer estatuto hubo discusión de partes y se consiguió en él una conquista para el gremio de periodistas. A eso —en el despacho— se aumentó lo necesario para elevar las remuneraciones a la altura del mínimo del costo de la vida.

Al informar en general dije a la Honorable Cámara que todas estas cuestiones de índole patrimonial y económica no pueden tratarse de tal manera que esas elevaciones de sueldos vayan a incidir en forma gravosa, confiscatoria, sobre las empresas, que las hagan desaparecer...

Sr. Visca. — Empresas que ganan catorce millones de pesos al año.

Sr. Albrieu. — Me preocupa la situación de las pequeñas empresas, señor diputado.

Sr. Visca. — Están contempladas.

Sr. Albrieu. — No vayamos a título de elevar los salarios y remuneraciones del personal a hacer desaparecer las pequeñas empresas, con lo cual sólo conseguiríamos llevar la desocupación para un crecido número de periodistas.

La comisión ha trabajado sobre bases serias, y por eso mantiene su despacho con los siguientes agregados: categoría A), inciso b), archivero con 280 pesos; otro apartado b) de la categoría B), archivero con 235 pesos, y en la

categoría C), apartado b), nuevo, archivero con 215 pesos.

Sr. Rubino. — El dictafonista, ¿en qué categoría vendría a quedar?

Sr. Albrieu. — Como cronista.

Sr. Díaz. — ¿Y el corresponsal?

Sr. Visca. — Este aumento de la escala quedaría perfectamente bien en la forma que he establecido. Un ordenanza de la Cámara gana 300 pesos, y habrá periodistas con sueldos de 400 pesos. Es doloroso que sean los propios periodistas los que hayan propuesto esta escala de sueldos; es hasta ridículo.

Sr. Rubino. — Pido al señor miembro informante me aclare si ha quedado definitivamente establecido que el dictafonista está comprendido en el inciso c) como cronista.

Sr. Albrieu. — La propuesta la ha hecho el señor diputado Reynés.

Sr. Rubino. — ¿La ha aceptado la comisión?

Sr. Albrieu. — Sí, señor diputado.

Sr. Reynés. — Señor presidente: la circunstancia de haberse aprobado recientemente la incompatibilidad entre el trabajo de periodista y el empleo público, me induce a aceptar algún aumento sobre la escala de sueldos propuesta por la Federación Argentina de Periodistas, que ha sido incluida en el despacho de la comisión.

No voy a aceptar la escala propuesta por el señor diputado Visca, pero en cambio aceptaría un aumento equitativo, prudente, sobre la escala propuesta por la federación, que permita a los periodistas vivir con los recursos de su propia profesión.

Sr. Visca. — La escala que propongo es equitativa.

Sr. Reynés. — Esta situación me permite aceptar alguna mejora sobre los sueldos propuestos por el despacho. Podría establecerse un 15 por ciento más sobre la escala mencionada. Hago moción en ese sentido.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Albrieu. — La comisión no acepta, porque cree que en esa forma crearíamos un monopolio de los cuatro grandes diarios de la Capital Federal.

Sr. Benítez. — Pido la palabra.

Voy a proponer una conciliación de los puntos de vista de las proposiciones de los señores diputados Visca y Reynés.

Como soy firmante del despacho, me excusaré de seguir a la comisión en su insistencia en este artículo y propondré un aumento del 20 por ciento de las retribuciones fijadas en el despacho.

En ese sentido pido a los señores diputados Visca y Reynés acepten esa conciliación de sus proposiciones.

Sr. Visca. — Acepto la proposición del señor diputado Benítez, porque la creo justa y equi-

tativa y pido que por Secretaría se determinen los sueldos que correspondan.

Sr. Reynés. — Igualmente acepto.

Sr. Decker. — Deseo que la Presidencia informe si ha sido aceptada la modificación propuesta por el señor diputado Benítez.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia entiende que ha sido aceptada.

Sr. Decker. — Perfectamente; nuestro bloque va a votar por la afirmativa la moción del señor diputado Benítez, aceptada por los señores diputados Visca y Reynés.

Sr. Balbin. — El veinte por ciento propuesto por el señor diputado Benítez supera la tabla presentada por el señor diputado Visca.

Sr. Benítez. — Yo la mantengo.

Sr. Balbin. — Es mayor, porque el veinte por ciento de 250 pesos equivale a 50 pesos, con lo que iría a 300.

Sr. Visca. — En algunos casos supera, pero en ése yo había propuesto 300.

Sr. Balbin. — Y en las categorías que siguen sería mayor a la tabla propuesta por el señor diputado, Visca.

Sr. Decker. — La modificación ha sido aceptada por el señor diputado Visca.

Sr. Balbin. — Yo hago la aclaración para que sepamos cómo vamos a votar.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 53 del nuevo estatuto con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Resulta afirmativa de 63 votos; votan 82 señores diputados.

—En consideración el artículo 54 del nuevo estatuto.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — El artículo 54 contempla la situación de los diarios que se editan fuera del radio de la Capital Federal con un criterio, a mi juicio, demasiado rígido. Establece sueldos básicos algo inferiores a los que deberán abonar los diarios que se editan dentro del área de la Capital Federal. Digo que es demasiado rígido porque no contempla una verdad notoria en los diarios que aparecen en el interior del país. Se determinan tres categorías dentro de las que deberán ajustarse todos los diarios que aparecen en provincias. Afirmando que es injusto, porque los principales diarios de las provincias son más poderosos económicamente que algunos diarios que se editan en la Capital Federal. Sin necesidad de hacer una lista completa, podría mencionar algunos diarios de provincias, como «La Capital», de Rosario; «Los Principios», de Córdoba; «El Litoral», de Santa Fe; «La Gaceta», de Tucumán; «Los Andes», de Mendoza; «El Día», de La Plata; «Nueva Provincia», de Bahía

Blanca, empresas poderosas de características de idéntica o mayor importancia que varios diarios que se editan en la Capital Federal. En cambio, dentro de la tercera categoría deberán entrar todos esos pobres y heroicos diarios de las provincias que aparecen con tanto sacrificio, generalmente diarios de carácter político, escritos, impresos y distribuidos con un esfuerzo realmente extraordinario, y que dentro de su zona de influencia cumplen una labor informativa y orientadora que no es despreciable.

Si sometemos a este régimen tan rígido a todos los diarios de las provincias, es evidente que condenaremos a la desaparición a todo ese periodismo provinciano que tantas cosas ha hecho dentro de nuestra democracia. Esos pequeños diarios, por regla general, están redactados por periodistas que no son precisamente profesionales. Este estatuto se refiere al periodista profesional típico, que es el habitual en la Capital Federal, el que está adherido a organizaciones completas, donde están perfectamente diferenciadas las funciones que cada cual realiza dentro de su diario. No ocurre así con esos pequeños periódicos del interior. La generalidad de los periodistas que escriben o que hacen las galeras de estos diarios son estudiantes, profesionales o empleados de comercio que, a ratos, escriben los sueltos y las crónicas de los mismos.

Voy a pedir de la comprensión de la comisión especial que ha redactado este despacho, quiera aceptar, teniendo en cuenta la realidad periodística del interior —y debe ser el principio legislativo: la ley para los hombres y no los hombres para la ley— en lugar del artículo 54, el siguiente: «Fuera del radio de la Capital Federal, los sueldos básicos de la escala serán fijados para cada categoría profesional, de acuerdo con el siguiente criterio: los diarios que editen un promedio superior a 20.000 ejemplares, serán asimilados a la situación de los que se publican en la Capital Federal. Los sueldos básicos para los demás diarios serán fijados por comisiones paritarias que resolverán cada caso, teniendo en cuenta las características especiales de la zona, capacidad económica y tiraje de las publicaciones.»

El fundamento para asimilar a los diarios de la Capital a aquellos del interior que impriman un promedio superior a 20.000 ejemplares por día es obvio: son empresas exactamente idénticas a las poderosas que conocemos en la Capital.

En cuanto a los pequeños diarios, es evidente que las disposiciones complejas y prolijas de este estatuto no les son aplicables, no solamente en cuanto a sueldos, desde que muchos periodistas no son profesionales típicamente, sino que muchos de esos diarios no permiten la diferenciación del trabajo. Por ejemplo: aquellos en que algunos jóvenes hacen la nota so-

cial o la nota deportiva y que no pueden ser exclusivamente redactores sociales o deportivos, sino que están obligados a atender otras secciones, porque el personal no es completo.

Si este estatuto se lleva a sus últimos extremos, si las comisiones paritarias presididas por funcionarios oficiales resuelven que esos pequeños diarios deben completar su personal con estos sueldos, con toda la diferenciación y con todo el elenco profesional, se habrá sancionado la desaparición de ese periodismo.

Propongo, en consecuencia, una solución orgánica: las grandes empresas, asimiladas a las de la Capital Federal; los pequeños diarios resolverán su problema en las comisiones paritarias, de acuerdo con las características y a la realidad económica y periodística de cada caso.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Por supuesto, que tomando aisladamente cada disposición del estatuto, puede dar lugar a algunas críticas como las que hace el señor diputado Uranga; pero tomado en su conjunto como cuerpo, ellas desaparecen.

El artículo 75 demuestra que la situación que plantea el señor diputado Uranga ha sido contemplada por la comisión. Dice: «Las comisiones paritarias quedan facultadas especialmente para reducir hasta un 40 por ciento las escalas fijadas en los artículos 53, 54 y 55, con respecto a las publicaciones periodísticas, cuyo personal no exceda de cinco periodistas profesionales.» Se toma la función de periodista como profesional y todos esos pequeños diarios y aun aquellos que no siendo tan pequeños son editados por el propietario con ayuda de dos o tres personas de buena voluntad, las empresas periodísticas pequeñas que no puedan resistir este aumento de remuneraciones, están contempladas en el estatuto. De manera que no corre riesgo alguno que en provincias desaparezca ningún periódico, por pequeño que sea.

Sr. Sarmiento. — Pido la palabra.

Con respecto al artículo 54, propongo la modificación de las bases de remuneración con un aumento de 20 por ciento sobre lo que fija el despacho; es decir, que para los de primera categoría la remuneración será de 276 pesos; para los de segunda, 240; para los de tercera, 216.

Sr. Rubino. — Pido la palabra.

Comparto las opiniones del señor diputado Uranga sobre la necesidad de salvaguardar los intereses de la prensa chica del interior del país.

Pero hay otro aspecto que se refiere a una aspiración del gremio de periodistas del interior: que los sueldos se fijen directamente por el Honorable Congreso; que no se dejen librados en su iniciación al arbitrio de las comisiones paritarias.

En el ambiente de la ciudad pequeña, el choque entre la empresa periodística y el gremio

de periodistas es más fuerte, produce consecuencias más desagradables y resulta un poco más difícil seguir trabajando en la armonía en que debe trabajar toda empresa.

La experiencia de esos luchadores los lleva a solicitar que este problema, en lugar de ser debatido entre ellos y los representantes de las empresas en las comisiones paritarias, lo resuelva el Congreso, es decir, que se proceda en forma idéntica a lo que se hace en la Capital Federal. No hay por qué hacer excepción con los periodistas del interior del país.

Propongo, pues, la siguiente redacción: «Fuera del radio de la Capital Federal, para las publicaciones comprendidas en la primera y segunda categorías, se fijan los sueldos básicos establecidos por las comisiones paritarias, aumentados automáticamente en un 30 por ciento.»

Hago notar que el aumento que se ha votado para los periodistas de la Capital Federal es muy superior a éstos, puesto que en el primitivo despacho de la comisión ya se establecía un aumento sobre los sueldos fijados por la comisión paritaria. De allí la diferencia entre el 20 por ciento que propone el señor diputado Sarmiento y el 30 por ciento que propongo yo.

«Para las publicaciones de tercera categoría, la escala se fijará por comisiones paritarias, teniendo en cuenta las condiciones económicas en que se desenvuelvan las empresas, de acuerdo con el artículo 75.»

Sería distraer inútilmente la atención de la Cámara si volviera sobre las razones expuestas por el señor diputado Uranga.

Si bien es exacto que el artículo 75 faculta a reducir hasta un 40 % las escalas fijadas, ello no llena la necesidad que proponemos resolver con estas reformas. Queremos que para las pequeñas publicaciones, las comisiones paritarias tengan amplia facultad para establecer los sueldos, con independencia de lo que se disponga en este articulado. Para eso las empresas mostrarán su estado económico en colaboración con el gremio y podrán establecer si existe, o no, capacidad económica para pagar determinados sueldos.

Por estas breves razones, solicito que la comisión acepte las modificaciones que propongo, que contemplan la situación del gremio de periodistas del interior.

Sr. Uranga. — Pido la palabra.

La disposición del artículo 75 que ha leído el señor miembro informante, de ninguna manera resuelve las observaciones que he formulado al texto del artículo 54.

No me he referido exclusivamente a los pequeños diarios, sino también a los grandes diarios del interior. Es una injusticia la división que se hace en tres categorías. Si a cualquiera de los grandes diarios del interior se le establecen las condiciones del despacho y a los pe-

queños, los modestos diarios del interior, se les coloca en la tercera categoría, es evidente que a los de la tercera categoría se les paga excesivamente, o se les paga muy poco a los de la primera categoría, porque la distancia existente entre la capacidad financiera y económica de esas grandes empresas y la de los modestos diarios es tan grande, que puede decirse que no existe ninguna vinculación entre la de los primeros y la tan primitiva de los más modestos. Por eso deseaba resolver definitivamente el problema: no hablar, en lo que respecta a diarios del interior, de categorías, sino decir simplemente «diarios más importantes», con lo que se referiría a esos diarios muy parecidos a los de la Capital, algunos más poderosos que otros de ésta, que cuotidianamente editan más de veinte mil ejemplares. Estos serían considerados como los diarios de la Capital y clasificados en primera, segunda y tercera categorías, según su capacidad. El índice de valoración es exacto. Es evidente que el diario que edita más de veinte mil ejemplares tiene una zona geográfica, demográfica y comercial, de influencia realmente importante.

En cuanto a los pequeños diarios, debemos dejar librada su resolución práctica, real —no ideal y teórica, como se está resolviendo aquí—, a los propios interesados, es decir, a los directores, redactores y a los funcionarios del Estado que integrarán las comisiones paritarias.

La legislación argentina adolece, en general, del error de tener tan sólo en cuenta la realidad de la Capital. Cuando el señor miembro informante se refirió a las opiniones recogidas, no mencionó la de ningún diario del interior, y tengo la seguridad de que no ha llegado a la comisión la opinión de ninguno de esos pequeños diarios que aparecen en forma tan dificultosa y cuya desaparición va a sancionarse.

Por eso, creo que para resolver con justicia la situación de los periodistas que sirven a los grandes diarios del interior, como también la situación semiprofesional de quienes escriben y editan los pequeños diarios, podría aceptarse, sin mengua de lo dispuesto en el artículo 75, el artículo que he propuesto, el que no habla concretamente de salarios, sino que, en lo referente al periodismo del interior, hace la gran división de gran periodismo y pequeño periodismo.

Sr. Albrieu. — Pido la palabra.

La comisión ha querido dar en este artículo, señor presidente, la base mínima para establecer las retribuciones de los periodistas de la tercera categoría. Debo agregar que no existen en el interior diarios calificados en primera categoría.

Esos rozamientos que ha mencionado el señor diputado, y que pueden producirse con motivo de la lucha por la mejor remuneración, se han

producido en todos los órdenes de la actividad humana y gremial, y se producirían más aún si aceptáramos la sugerencia del señor diputado por Entre Ríos.

Vamos a mantener este artículo con el aumento del 20 por ciento, que ya hemos aceptado, dado el precedente de que la Cámara íntegramente lo aceptó para los de la Capital Federal.

La mayoría de la comisión propondrá un artículo transitorio con respecto a todos los periodistas del interior que ya han sido colocados en una categoría, artículo que oportunamente haré llegar a la Secretaría de la Cámara. En cuanto a esto, yo creo que la base cierta del salario mínimo debe fijarla el Congreso, y las sucesivas calificaciones, dentro de los artículos ya propuestos en el estatuto, debe hacerlas la comisión paritaria. Nosotros damos la pauta mínima, el mínimo de la retribución del periodista en provincias, y las comisiones paritarias elaborarán las sucesivas calificaciones. No creo, vuelvo a repetir, que vaya a desaparecer ningún periódico pequeño, y los que tengan empleados que no son periodistas profesionales, no están incluidos en el estatuto.

Por eso la mayoría de la comisión mantiene su despacho.

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

Deseo expresar que, en el seno de la comisión, manifesté la misma inquietud que ha traído a la Cámara el señor diputado Uranga, con cuyo criterio, estoy absolutamente de acuerdo.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 54 del nuevo estatuto, con las modificaciones aceptadas por la comisión, que consisten en elevar en un 20 por ciento los sueldos básicos que figuran en el despacho.

Sr. Uranga. — Solicito que se lea la proposición que he formulado en substitución del artículo que se discute.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El señor diputado Uranga propone, para reemplazar el artículo 54 del despacho, el siguiente: «Fuera del radio de la Capital Federal, los sueldos básicos de la escala serán fijados para cada categoría profesional, de acuerdo al siguiente criterio: los diarios que editen un promedio superior a 20.000 ejemplares serán asimilados a la situación de los que se publiquen en la Capital Federal. Los sueldos básicos de los demás diarios serán fijados por comisiones paritarias que resolverán en cada caso, teniendo en cuenta la característica, la capacidad económica y el tiraje de las publicaciones.»

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 54 con las remuneraciones aceptadas.

Sr. Lencinas. — Que se lea cómo ha quedado, porque entiendo que se han modificado los sueldos básicos.

Sr. Presidente (Guardo). — Efectivamente, se han aumentado en veinte por ciento los sueldos que figuran en el despacho. La Secretaría informará.

Sr. Uranga. — Estamos votando el monopolio del periodismo.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En la parte que se modifica el artículo del despacho, establece: «La base de estas remuneraciones será: para la primera categoría, 230 pesos mensuales.» Se ha elevado el veinte por ciento, es decir, que serán ahora 276 pesos mensuales. Y lo mismo en las dos categorías siguientes.

Sr. Lencinas. — Desco observar que estos sueldos resultan superiores a los que se han fijado para la Capital Federal.

Sr. Presidente (Guardo). — También para la Capital Federal se aumentaron en un 20 por ciento.

Se va a votar el artículo 54 del nuevo estatuto, con la modificación, aceptada por la comisión, de la base de las remuneraciones.

—Resulta afirmativa de 58 votos; votan 84 señores diputados.

—En consideración el artículo 55 del nuevo estatuto.

Sr. Presidente (Guardo). — Hay modificaciones propuestas por los señores diputados Santander y Reynés; pero como también el señor presidente de la comisión introduce una modificación, corresponde que use de la palabra, en primer término, el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — La comisión en pleno ha introducido una modificación a su despacho, aceptando la escala sugerida por la Federación Argentina de Periodistas para el aumento por antigüedad. Todos los señores diputados conocen la modificación.

Sr. Santander. — Con permiso de la Presidencia, desco preguntar al señor presidente de la comisión si estos aumentos tienen que ver con el régimen del decreto 33.302.

Sr. Albrieu. — Los aumentos que establece el decreto 33.302 son para enfrentar los efectos de la carestía de la vida, y han sido contemplados en la escala de remuneraciones del artículo 53; de tal manera, que esta escala de aumentos por antigüedad progresiva nada tiene que ver con el decreto que menciona el señor diputado.

Sr. Presidente (Guardo). — Como las modificaciones propuestas por la comisión son las mismas que las proyectadas por el señor diputado Reynés, le pido al señor diputado por la Capital se sirva manifestar si tiene algo que agregar.

Sr. Reynés. — Apruebo esta escala de la Federación Argentina de Periodistas.

Sr. López Serrot. — No sé si en la modificación que se considera se da término a los aumentos cuando el periodista llega a los 25 años de servicios.

Sr. Ravignani. — Sí, señor diputado.

Sr. López Serrot. — Sendo así, pregunto a la comisión cuál es la razón por la que de los 25 a los 30 años los periodistas no gozarán del aumento progresivo, porque de acuerdo a la ley de jubilaciones el retiro podrá obtenerse a los 30 años de servicios.

Sr. Albrieu. — La escala que hemos propuesto es la solicitada por la Federación Argentina de Periodistas, probablemente teniendo en cuenta la situación que pudiera crearse a los periodistas con antigüedad muy grande, con respecto al despido. Entonces mantenemos esa escala.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer la escala propuesta por la comisión.

—Se lee:

Años de antigüedad	Empresas		
	de 1ª	de 2ª	de 3ª
	\$ m/n. mensuales		
A los 2 años	25	20	15
" " 4 "	50	40	30
" " 6 "	75	60	45
" " 8 "	100	80	60
" " 10 "	125	100	75
" " 13 "	150	120	90
" " 16 "	175	140	105
" " 19 "	195	155	120
" " 22 "	215	170	135
" " 25 "	235	185	150

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 55 del nuevo estatuto, con la escala de aumentos propuesta por la comisión.

—Resulta afirmativa de 63 votos; votan 81 señores diputados.

—En consideración el artículo 56 del nuevo estatuto.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En el artículo 56, el señor diputado Santander propone agregar al final las palabras: «en tal carácter».

Sr. Ravignani. — En la parte donde dice: «... el ingreso del periodista, en tal carácter...»

Sr. Reynés. — Por mi parte, acepto que se agreguen las palabras: «en tal carácter».

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbin. — En el artículo 56 se establece que la antigüedad del periodista se computará desde el ingreso a la empresa. Yo comprendo que la economía de esta ley está regida, en cuanto a la antigüedad y el derecho del periodista, por el artículo 47; pero puede ocurrir que la misma empresa sufra transformaciones, y en

ese caso la antigüedad está regida por el artículo 56, en cuanto a la empresa. Yo propongo un agregado que diga: «Las cesiones, cambios de firma, transformación de empresa, de organización o de formas en la publicación, no perjudicarán en ningún caso la antigüedad.»

Ocurre a veces que una sociedad de tipo colectivo se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, o ésta, a su vez, en una de carácter anónimo. ¿Cuál es la empresa a los efectos de la antigüedad? En tal sentido, el agregado que propongo salvaría la antigüedad del personal que está en una empresa que se ha transformado en su forma de explotación, en la cesión de su firma o en su cambio de organización.

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

No hay ningún inconveniente en aceptar el agregado propuesto por el señor diputado Balbin en cuanto implica una aclaración del concepto de empresa que tiene la comisión. La transformación de una empresa, en la hipótesis que ha dado el señor diputado por Buenos Aires, evidentemente, no haría perder ninguno de los derechos; pero a los efectos de que la ley sea más clara, no existe inconveniente para que se adopte el agregado que el señor diputado propone.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a dar lectura del agregado.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Como segundo apartado del artículo 56: «Las cesiones, cambios de firma, transformación de empresa, de organización o de formas en la publicación, no perjudicarán en ningún caso la antigüedad.»

Sr. Reynés. — La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 56 del nuevo estatuto, con los agregados aceptados por la comisión.

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 80 señores diputados.

— Sin observación, se votan y aprueban los artículos 57, 58, 59 y 60 del nuevo estatuto.

— En consideración el artículo 61.

Sr. Reynés. — En este artículo 61 voy a proponer que se eleve a quinientos, en vez de cuatrocientos pesos mensuales, el sueldo de las personas comprendidas en la ley que gozarán de la remuneración adicional de diez pesos mensuales por cada hijo menor de 16 años que tuvieran a su cargo.

Sr. Ravignani. — Nosotros aceptamos. Era el criterio del anteproyecto.

— Se da por aprobado el artículo 61 del nuevo estatuto, con la modificación aceptada.

— Sin observación, se da por aprobado el artículo 62 del nuevo estatuto.

— En consideración el artículo 63 del nuevo estatuto.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En el artículo 63, el señor diputado Santander propone la supresión de las palabras «que no tengan otra ocupación».

Sr. Ravignani. — También las habíamos suprimido nosotros.

Sr. Reynés. — Apoyo la supresión.

Sr. Albrieu. — La comisión acepta.

— Se da por aprobado el artículo 63, con la modificación aceptada.

— Sin observación, se da por aprobado el artículo 64 del nuevo estatuto.

— En consideración el artículo 65 del nuevo estatuto.

Sr. Candioti. — Pido la palabra.

El artículo 65 se refiere a las personas utilizadas transitoria o accidentalmente para la información. En el último párrafo dice: «La persona que se limite simplemente a transmitir las noticias...», etcétera. A título interpretativo desearía que el señor presidente de la comisión concrete claramente que se trata de las personas que por encargo del empleador se limitan, simplemente, a transmitir noticias, porque puede ocurrir que haya personas que transmitan noticias a los diarios por buena voluntad, y que luego hagan reclamaciones.

Sr. Albrieu. — Se trata, efectivamente, de personas que en forma accidental envían noticias solicitadas por la empresa y que merecen alguna retribución por ese trabajo.

Sr. Ravignani. — Con acuerdo de la empresa.

Sr. Albrieu. — Con acuerdo de la empresa que le acuerda el trabajo.

— Se da por aprobado el artículo 65 del nuevo estatuto.

— Sin observación se aprueban los artículos 66, 67 y 68.

— En consideración el artículo 69.

Sr. Reynés. — Pido la palabra.

Había propuesto que en el artículo 69 se agregara: «o en el caso de denuncia de infracción por parte de la entidad representativa».

Con esto se aspira a que los organismos gremiales de periodistas tengan la debida injerencia en estas denuncias por infracción a la ley. Yo insisto en que se incorpore al texto del ar-

tículo esa parte propuesta por la Federación Argentina de Periodistas.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer la forma en que quedaría redactado el apartado.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Con el agregado que propone el señor diputado Reynés, la parte final del artículo 69 quedaría así: «Estos pagos serán fiscalizados por funcionarios de la autoridad administrativa del trabajo cuando lo estime oportuno o por denuncia de la entidad gremial.»

Sr. Albrieu. — La comisión acepta.

—Se da por aprobado el artículo 69, con el agregado aceptado por la comisión.

—Se aprueba el artículo 70.

—En consideración el artículo 71.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En el artículo 71 el señor diputado Santander ha propuesto el siguiente agregado al final del primer apartado: «y donde no hubiere posibilidad de las designaciones por cualquier causa, se efectuarán de oficio por la autoridad administrativa del trabajo».

Sr. Reynés. — Apoyado.

Sr. Albrieu. — La comisión acepta.

Sr. Frondizi. — Dejo a salvo mi opinión personal sobre la forma de designar los representantes del organismo paritario.

Sr. Ravignani. — Yo también, señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Muy bien, señores diputados.

—Se da por aprobado el artículo 71 del nuevo estatuto, con el agregado aceptado por la comisión.

—Se dan por aprobados los artículos 72 y 73, del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 74 del nuevo estatuto.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbin. — Este artículo establece, en su parte final, que las resoluciones de las comisiones paritarias serán definitivas, se comunicarán al interesado y son inapelables. Si se advierte que por el artículo 73 esta comisión paritaria puede funcionar con un quórum escaso, se comprenderá que es injusta la negativa del recurso de apelación, máxime cuando en la misma ley el artículo 10 lo concede en lo que se refiere al otorgamiento de la matrícula. En estas comisiones paritarias se debaten derechos patrimoniales importantes y no resulta justo den-

tro de la economía de esta ley que sus resoluciones tengan carácter inapaleable. Sobre todo si consideramos el artículo anterior que acabamos de votar, comprendemos que puede estar expuesta a la negligencia de los que componen la junta paritaria la suerte de un derecho legítimo.

Por estas razones, yo propongo que en el apartado final se establezca que las resoluciones de las comisiones paritarias se comunicarán de inmediato a los interesados para su cumplimiento, bajo pena de lo dispuesto por esta ley, y son apelables en la misma forma prevista por el artículo 10.

Sr. Rumbo. — ¿En qué forma quedaría?

Sr. Balbin. — Se trata de modificar el último apartado, otorgando el recurso de apelación en la misma forma que lo concede el artículo 10.

Sr. Albrieu. — Pero es que estas comisiones paritarias resuelven cuestiones relativas a sueldo, jornada y condiciones de trabajo.

Sr. Balbin. — Se trata de derechos importantes que muchas veces pueden quedar desamparados por negligencia de la comisión paritaria.

En este caso, estaría expuesta la persona a un fallo que no representa un legítimo derecho. Otorgar el recurso de apelación previsto por la misma ley en el artículo 10, es asegurar de mejor manera el legítimo derecho.

Sr. Albrieu. — En el artículo 70 se dispone que las cuestiones relativas al sueldo, jornadas y condiciones de trabajo serán resueltas por comisiones paritarias. De manera que sobre eso versa la resolución que dicte la comisión paritaria, y como son representantes de ambas partes, viene a tener la fuerza de los convenios colectivos de trabajo, y en ese sentido son inapelables. Son convenios de partes. Todo cuerpo colegiado tiene un quórum. Si una parte no concurre como está obligada, a la negligencia de ella se deberá el perjuicio que cause.

Sr. Balbin. — Se va a perjudicar a un tercero que no forma parte.

Sr. Albrieu. — La comisión no acepta, porque en esa forma dilataríamos el procedimiento.

Sr. Frondizi. — La minoría de la comisión acepta la proposición del señor diputado Balbin, debiendo advertir que cualquier cosa que diga la ley en este aspecto, nunca podrá cerrar a un particular perjudicado la vía judicial.

Sr. Albrieu. — Con el arbitraje de la comisión el convenio de partes está cerrado, pero se mantiene la vía judicial para el tercero. Podrá iniciarse juicio siempre.

Sr. Balbin. — Propongo que el artículo se vote por partes, pues la discrepancia radica en el último apartado.

Sr. Frondizi. — Los dos primeros párrafos los votaremos por la afirmativa.

Sr. Balbin. — El último por la negativa, en virtud de que no da lugar al recurso de apelación.

Sr. Presidente (Guardo). — Se van a votar los apartados 19 y 29 del artículo 74 del nuevo estatuto.

—Resulta afirmativa de 73 votos; votan 82 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el tercer apartado en la forma despachada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 49 votos; votan 83 señores diputados.

—En consideración el artículo 75 del nuevo estatuto.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — ¿La previsión de este artículo se refiere solamente a la escala, o también a la diferenciación de personal?

Sr. Albrieu. — A todo.

Sr. Uranga. — Porque el texto habla de la escala fijada.

Sr. Albrieu. — Se refiere a las escalas fijadas en los artículos 53, 54 y 55. A cada remuneración fijada en la escala.

Sr. Uranga. — Bien; en cuanto a la remuneración. Creo que podría agregarse alguna palabra para referirse también a la diferenciación del personal.

La propia hipótesis en que se ha colocado este artículo demuestra que, tratándose de empresas que no tienen más de cinco periodistas profesionales, es evidente que no pueden llenar el elenco teórico del periodismo profesional de cada especie.

Quedaría en el Diario de Sesiones constancia de que las comisiones tendrán facultades para resolver los casos de las funciones que pueda desempeñar un solo periodista en esos pequeños diarios.

Sr. Albrieu. — Se podría agregar, después de donde dice: «55»: «y modificar las categorías profesionales respectivas».

Sr. Uranga. — No va a tener sentido gramatical.

Sr. Albrieu. — «Y para modificar las categorías profesionales respectivas.»

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer cómo quedará.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — «Artículo 75. — Las comisiones paritarias quedan facultadas especialmente para reducir hasta un 40 % las escalas fijadas en los artículos 53, 54 y 55 y para modificar las categorías profesionales respectivas con respecto a las publicaciones periodísticas cuyo personal no exceda de cinco periodistas profesionales.»

Sr. Presidente (Guardo). — Si no se hace observación, se dará por aprobado en esa forma.

—Se aprueba.

—En consideración el artículo 76 del nuevo estatuto.

Sr. Ravignani. — Este artículo responde a la incorporación que se ha hecho en el artículo 29 de los periodistas profesionales de las empresas radiotelefónicas.

—Sin observación se aprueba.

—Se aprueba el artículo 77 del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 78.

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

Es una norma del derecho penal dar elasticidad a las penas, lo que por otra parte es criterio general adoptado en la legislación del trabajo. Por ello propongo que se establezca la pena de multa de 100 a 1.000 pesos, por persona o infracción.

Sr. Albrieu. — La comisión acepta, y agrega: «...la que podrá duplicarse en caso de reincidencia».

Sr. Presidente (Guardo). — Se dará por aprobado el artículo 78 del nuevo estatuto, con las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Se aprueba.

—En consideración el artículo 79 del nuevo estatuto.

Sr. Ravignani. — En el inciso a) hay que corregir un error de concordancia. Debe decir: «El funcionario expresamente designado por la autoridad administrativa en audiencia pública fijada y notificada...»

Sr. Presidente (Guardo). — Se hará la corrección.

Sr. Frondizi. — Quiero dejar a salvo una opinión doctrinaria en cuanto en este artículo se establecen normas de procedimiento que constitucionalmente pueden corresponder a las provincias.

Deseo dejar aclarado que en el inciso b) se habla de apelación ante la «justicia del trabajo», que aun no ha sido creada por ley.

—Se aprueba el artículo 79 del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 80.

Sr. Reynés. — Habría que aclarar que la exención que se establece en este artículo corresponde a las gestiones o tramitaciones que realicen

los periodistas empleados. De lo contrario, favoreceríamos a las empresas con una excepción que no puede alcanzarles en cuanto pudieran utilizarla en las tramitaciones a que se refiere el artículo 77. Propongo que el artículo diga: «Todas las gestiones o tramitaciones administrativas o judiciales que realizaren los periodistas profesionales en su carácter de empleados de las empresas, ante los poderes públicos, relacionadas con el cumplimiento de esta ley, se harán en papel simple y quedarán exentas de todo gravamen fiscal.»

Sr. Albrieu. — Así lo entiende la comisión, que acepta el agregado.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la provincia de Buenos Aires.

Sr. Balbin. — Si la observación que hacía recién el señor diputado Frondizi con respecto al artículo 79 era importante, mucho más lo es la que corresponde a este artículo 80 que vamos a votar.

En las provincias existen leyes de carácter impositivo que establecen el monto del sellado y también las excepciones para actuar en papel simple, tanto en el orden administrativo como en el judicial. En el artículo 10 de la ley que estamos votando hemos concedido el recurso de apelación ante la justicia ordinaria de las provincias; ante ellas no puede regir esta ley en cuanto se vincula con la materia del sellado, pues en provincias existen leyes que rigen el funcionamiento de los tribunales y que incluyen lo que se llama el impuesto de justicia. Dictamos así una disposición en el orden nacional que va a modificar totalmente el régimen impositivo de las provincias.

Voy a dar un caso concreto. En la provincia de Buenos Aires, tenemos la ley 4.195, que establece con qué costo se actúa en la administración y en el poder judicial y cuáles son los únicos casos en que se actúa en papel simple. Mientras no se establezca en la ley impositiva de la provincia esta excepción, no se podrá actuar en papel simple en aquellos casos en que se apele ante los jueces de primera instancia.

Comprendo el espíritu que ha tenido la comisión al redactar este artículo, pero le llamo a la atención que va a traer muy serios inconvenientes para su aplicación en provincias, hasta tanto las legislaturas locales no establezcan en las respectivas leyes esta excepción con respecto a la actuación administrativa y judicial.

Correspondería establecer que todas las actuaciones administrativas o judiciales que se realicen en jurisdicción de la Capital Federal y territorios nacionales estarán eximidas de papel sellado y que se actuará en papel simple; y que en las provincias se actuará como ellas lo establezcan en sus respectivas leyes impositivas.

No se trata ya de un aspecto político, sino que los jueces se van a encontrar imposibilitados de permitir el tratamiento en papel simple o el recurso de apelación, mientras la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no cree esta excepción en lo que respecta a papel sellado.

Sr. Albrieu. — Este estatuto contiene disposiciones de procedimiento, como ocurre siempre cuando las disposiciones de procedimiento van inseparablemente unidas a la cuestión de fondo, como sucede con la ley de quiebras, por ejemplo.

En cuanto a la gratuidad de los trámites, ya la han establecido casi todas las leyes sociales. La ley 9.688, por ejemplo, establece que los beneficiarios de la misma gozan de los beneficios de pobreza. Lo mismo sucede con la ley 11.729 de despido. Y no es que se pueda decir que haya sido establecida por las provincias, porque la ley 9.688 sólo ha sido reglamentada por los poderes ejecutivos de provincias, los que no tienen facultades para eximir del pago de sellado. No estamos innovando, pues, sino siguiendo precedentes establecidos en materia social.

Por lo tanto, la comisión mantiene su despacho.

Sr. Balbin. — Es exacto que la ley de quiebras establece un procedimiento, pero no es menos cierto que en cada jurisdicción provincial se ha establecido el impuesto que paga esa clase de juicios.

Sr. Albrieu. — ¿Y la ley 9.688?

Sr. Balbin. — Lo han reglamentado las provincias.

Sr. Albrieu. — ...ha sido reglamentada en casi todas las provincias, salvo la de Buenos Aires, por decretos de los poderes ejecutivos.

Sr. Balbin. — Advierto al señor presidente de la comisión que no se trata de una norma de procedimientos, que en cierta manera y llevada a la interpretación extrema, podría aceptarse con el criterio de la ley de quiebras, sino que se trata de la ley de sellos, que regirá, aunque no queramos, como en otros casos similares.

Sr. Albrieu. — En este caso particular no podemos aceptar que exista el pago de ningún gravamen a cargo de los beneficiarios; ya la ley 9.688 creó el beneficio de pobreza, y en todas las provincias se la ha reglamentado en igual sentido, porque no es lógico pensar que pueda pagar el gravamen de papel sellado un accidentado que pretende una indemnización, en momentos que no percibe salario. En todas las leyes sociales existe ese beneficio, que resulta consubstancial con todas las disposiciones de carácter social que son de orden público.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 80 del nuevo estatuto, con la modificación propuesta por el señor diputado Reynés, y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 61 votos; votan 85 señores diputados.

—Sin observación se da por aprobado el artículo 81 del nuevo estatuto.

—En consideración el artículo 82.

Sr. Reynés. — Pido la palabra.

Voy a rogar al señor presidente y a la Honorable Cámara que me permitan, a esta altura de la discusión de la ley, algunas referencias que prometí cuando hice el análisis general del proyecto en discusión. Esto se vincula con la modificación al artículo 82, que voy a proponer más adelante.

Deseo dejar constancia en el Diario de Sesiones, del nombre de los compañeros periodistas que intervinieron en la tramitación inicial del estatuto del periodista profesional, como un homenaje que creo que se merecen.

Las primeras tramitaciones con el secretario de Trabajo y Previsión fueron iniciadas, desde luego, sobre la base del proyecto que había elaborado el camarada y viejo periodista Octavio Palazzolo. El proyecto fué entregado el 16 de diciembre de 1943, en una visita realizada por invitación del titular de aquella secretaría, de una delegación compuesta por miembros de la Asociación de Periodistas de la Capital, y de la Federación Argentina.

Sr. Uranga. — ¿Qué artículo se está considerando, señor presidente?

Sr. Presidente (Guardo). — El artículo 82.

Sr. Reynés. — La delegación estaba integrada por los compañeros Oscar E. Ares, Carlos A. Raffo, Enrique Corominas, Santiago Senén González y José R. Chaó Monzón, por la Asociación de Periodistas; y por la Federación Argentina de Periodistas el señor Sixto Vila Ruiz y el que habla. Iniciada la tramitación con la entrega del proyecto, el coronel Perón lo puso en manos de la Dirección de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo, entonces a cargo del doctor Juan Atilio Bramuglia, quien, con la ayuda como secretario, del doctor Carlos R. Desmarás...

Sr. Santander. — Parece que el señor diputado está achicando el significado de esta ley.

Sr. Reynés. — ...presidió todas las sesiones de la comisión paritaria que estudió el estatuto y contribuyó a su perfeccionamiento.

Sr. Uranga. — Ahora estamos con el artículo 82. Después podrá hacer su discurso el señor diputado.

Sr. Reynés. — Tenga paciencia el señor diputado.

Deseo decir que este estatuto del periodista se tramitó estando en vigencia el estado de sitio y el reglamento de prensa que se había dictado el 31 de diciembre de 1943, y que se dió a conocer el 5 de enero de 1944.

Traigo a colación estos antecedentes, porque algunos comentarios de mala fe, aparecidos en los últimos días, pretenden que el estatuto del periodista profesional atenta contra la libertad de prensa, que es totalitario...

Sr. López Serrot. — El señor diputado está fuera de la cuestión.

Sr. Reynés. — Es preciso distinguir entre el periodismo, institución de bien público, amparada por la Constitución nacional; y el periodismo, empresa comercial. El Parlamento está legislando para el periodista de las empresas comerciales, y por consiguiente no lo hace para el periodismo como institución de bien público.

Mientras se tramitaba el estatuto, los diarios habían acatado el reglamento de prensa dictado el 31 de diciembre de 1943...

Sr. Uranga. — ¿Hay un reglamento en la Cámara?

Sr. Presidente (Guardo). — Señor diputado: le ruego que se concrete a la cuestión.

Sr. Reynés. — Voy a proponer una modificación al artículo 82, para lo cual estoy dando las informaciones que considero oportunas. Ruego al señor presidente que me haga respetar en el uso de la palabra.

Un artículo del estatuto sancionado en marzo de 1944, estableció que quedaba derogado el decreto de prensa dictado el 31 de diciembre de 1943 y al respecto quiero señalar este hecho realmente sintomático. El reglamento de prensa que había regido desde diciembre de 1943 hasta el día de la sanción del estatuto del periodista, no fué atacado por los grandes diarios argentinos hasta que tuvieron conocimiento del estatuto y consideraron que éste afectaba sus intereses materiales.

Debo declarar que el reglamento de prensa, calificado de inconstitucional por la Federación Argentina de Periodistas, fué derogado por las entidades gremiales de periodistas del país, que lo atacaron, por considerar que verdaderamente afectaba la libertad de prensa. Es ése un servicio que el país les debe a los periodistas organizados gremialmente.

Sr. López Serrot. — El señor diputado sigue fuera de la cuestión.

Sr. Presidente (Guardo). — Ruego al señor diputado por la Capital, que se concrete a la cuestión.

Sr. Reynés. — Corresponde, en consecuencia, que se establezca que esta ley deroga el decreto de prensa, porque podría considerarse subsistente si expresamente no se lo derogara.

Sr. Frondizi. — Pido que todo esto se pueda contestar sin que el señor presidente nos aplique el reglamento.

Sr. Reynés. — Señalo un hecho histórico que no se podrá negar, y voy a recordar otra circunstancia: este estatuto para los periodistas quedará convertido en ley, hoy, 27 de noviem-

bre, aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, siendo ésta la primera obra de este carácter realizada por dicho organismo. (Aplausos.)

Sr. Candiotti. — El señor diputado habla de libertad de prensa. Lean ustedes el capítulo XXVII de las Actas de Chapultepec, que habla de la libertad de información. Y, contra eso, acaban de desalojar a los periodistas de la municipalidad, para que se den las informaciones que quiera la Subsecretaría de Informaciones y Prensa de la presidencia de la República.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra.

El señor diputado Reynés no ha advertido que lo que propone ya está hecho. El decreto del estatuto de prensa que hemos ratificado, dice expresamente en el artículo 66: «Queda derogado totalmente el decreto 18.407, de 31 de diciembre de 1943 y toda otra disposición que se oponga al presente decreto.» De modo que al ratificar ese decreto, como artículo 1º, la Cámara ya ha derogado las disposiciones que se opongan a la presente ley. Esta es la técnica legislativa. Además, por este artículo 82 se dice que quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

De modo que el señor diputado puede estar tranquilo, porque de no ser así yo sería el primero en acompañarlo; pero no podemos repetir lo que ya está sancionado. Cuando hemos ratificado el decreto anterior, hemos derogado el estatuto de 1943...

Sr. Vergara. — Lo que sobra no daña.

Sr. Ravignani. — No puede haber tautología legislativa, porque eso induce en error. Nosotros sancionamos leyes con responsabilidad, como legisladores; lo demás está de más.

Sr. Albrieu. — Pido la palabra.

Es para salvar un error de imprenta. En la página 2064 del despacho, en el artículo 53, se ha deslizado un error de imprenta. En el inciso i) donde dice «cuatrocientos cincuenta pesos», debe decir «quinientos cincuenta pesos». No se necesita volver sobre este artículo, porque no se trata de un error de la comisión, sino de imprenta.

Sr. Ravignani. — Sí, señor.

Sr. Presidente (Guardo). — Quedará salvado el error.

¿Mantiene la comisión el artículo 82 del despacho de la mayoría? El señor diputado Reynés ha propuesto una redacción distinta.

Sr. Albrieu. — No conozco esa redacción.

Sr. Ravignani. — Hemos dado fuerza de ley a la redacción que deroga el estatuto de 1943.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Este artículo 82, que se ha fundado de un modo tan original por el señor diputado por la Capital, con la bondadosa to-

lerancia de la Presidencia, está perfectamente de más en este proyecto de ley.

Se sobrentiende que cuando se dicta una ley quedan derogadas todas las disposiciones que se oponen a esa ley. Eso lo saben hasta los abogados. (Risas.) Yo no comprendo qué necesidad había de decir todo el discurso oficialista del señor diputado para fundar un artículo que dice: «Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley»...

Sr. Vergara. — Está fuera de la cuestión el señor diputado.

Sr. Uranga. — ... y recordar en ese discurso, que tantas veces hemos escuchado y hemos leído en muchos diarios, las disposiciones del estatuto del periodista haciendo la distinción con otras disposiciones de la dictadura del 31 de diciembre que reglaban algunas actividades periodísticas y obligaban a los autores de los artículos a firmarlos con sus nombres o con seudónimos. Será bueno recordar que este estatuto de periodistas, dictado el 25 de marzo de 1944, según creo, debió haber despertado en el señor diputado, que era un gran militante del campo sindical periodístico, un gran entusiasmo; seguramente habrá tenido ese mismo entusiasmo para ir a visitar a los periodistas presos por la dictadura, que no eran propietarios de diarios...

Sr. Reynés. — Sí, señor diputado. Puedo invocar el testimonio...

Sr. Uranga. — Yo soy testigo de que el señor diputado no ha visitado a nadie. (Risas.)

Sr. Díaz. — Que se vote. Estamos perdiendo el tiempo.

Sr. Uranga. — Quiero pedir simplemente que se suprima este artículo, porque está reñido con una buena técnica legal. No hay ninguna necesidad de decir que se suprimen todas las disposiciones que se oponen a la ley que se sanciona.

Sr. Rumbo. — Hay que mantener el artículo.

Sr. Presidente (Guardo). — Que quede constancia de la tolerancia de la Presidencia, señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Uranga. — Absolutamente, señor presidente.

Sr. Visca. — Y que el presidente sigue siendo tolerante.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar...

Sr. Uranga. — Reclamo ese espíritu de tolerancia para una aclaración personal.

La aclaración personal que quiero hacer amablemente a la Presidencia es la siguiente: el señor presidente toleró con extraordinaria paciencia y bondad...

Sr. Visca. — Y sigue siendo bondadoso.

Sr. Argaña. — Y sigue tolerando, señor diputado.

Sr. Uranga. — Parece que el señor diputado no se corrige.

Sr. Argaña. — Está hablando inútilmente.

Sr. Uranga. — Yo invité al señor presidente a que extrajera el discurso del señor diputado en un lugar evidentemente impertinente. Se trataba de una extracción sin dolor, que el señor presidente podía hacer con facilidad (*risas*); sin embargo, se negó de manera reiterada a cumplir el reglamento.

Yo no he hecho más que fundamentar los motivos por los cuales el artículo 82 está completamente de más en el proyecto.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 82 del nuevo estatuto.

—Resulta afirmativa de 64 votos: votan 90 señores diputados.

—En consideración el artículo 83 del nuevo estatuto.

Sr. Visca. — Pido la palabra.

Como ya estamos casi a fines de año y este proyecto debe pasar al Senado, propongo que se modifique la fecha límite establecida en el artículo 83 y en lugar de «31 de diciembre de 1947», se diga: «31 de diciembre de 1949».

Aunque no ha sido expresada oficialmente por la federación, es opinión de muchos periodistas que debe modificarse la fecha en la forma que acabo de indicar.

Sr. Reynés. — Pido la palabra.

Acepto la proposición del señor diputado Visca. Es necesario evitar en toda forma que las empresas tomen represalias contra los periodistas con motivo de la sanción de esta ley.

El problema de la inseguridad de los periodistas ha sido estudiado por la Oficina Internacional del Trabajo, que señaló a esa inseguridad como un hecho característico de la profesión. Es evidente que no hay muchas fuentes de trabajo para el periodista, que faltan diarios donde pueda éste aplicar su inteligencia, su talento y su capacidad cuando queda cesante en una empresa. Es muy posible además que al quedar cesante por cuestiones gremiales derivadas del cumplimiento del estatuto, no va a encontrar abiertas las puertas de otros diarios.

Es necesario, entonces, impedir que los periodistas sean despedidos. Mientras se proyecta una reforma que establezca con carácter permanente la indemnización en caso de despido, mientras el artículo 83 se incorpore con carácter definitivo al texto de la ley, yo acepto la modificación propuesta por el señor diputado Visca.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si la comisión acepta.

Sr. Albrieu. — En el anterior estatuto ya se establecía esta cláusula transitoria. Habiendo transcurrido el tiempo que la misma preveía, modificamos el régimen de la ley 11.729 con respecto a la profesión de periodista.

Donde la ley 11.729 indica 5 años, ponemos 3; donde la ley 11.729 establece medio mes por

cada año de servicios, ponemos un mes. De tal modo que esta disposición transitoria tendría ya una cierta permanencia, que excede a los fines por los cuales es mantenida en el despacho, que son los de prever casos de represalia respecto a los dirigentes de la Federación Argentina de Periodistas, gremio al cual, en realidad, se debe el estatuto y se debe también esta ley. No se debe a los periodistas en particular, sino a la acción de ese gremio, que ha solicitado este artículo en la forma en que está redactado. De tal manera que la comisión lo mantiene.

Sr. Ravignani. — Es exacto.

Sr. Candiotti. — Se ha sugerido por algunos periodistas la conveniencia de modificar la fecha, y, en lugar de decir 1º de noviembre de 1946, decir 1º de octubre de 1946, porque en esa época ya estaba en discusión en la opinión pública esta ley y es posible que en algunas partes se hayan tomado medidas en contra de periodistas. Por eso pediría a la comisión aceptara esa pequeña modificación en cuanto a la fecha.

Sr. Díaz. — Formulo moción de orden de que se cierre el debate y se vote.

Sr. López Serrot. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guardo). — Hay una moción de cerrar el debate.

Sr. López Serrot. — Pero se han propuesto pequeños agregados.

Sr. Díaz. — Nos vamos a quedar sin número y no se podrá terminar la sanción de esta ley.

Sr. Sammartino. — ¿La comisión ha aceptado la modificación del señor diputado por la Capital?

Sr. Albrieu. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la moción de orden de cerrar el debate.

—Se vota y resulta afirmativa de 56 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 83, con la modificación aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 67 votos; votan 91 señores diputados.

Sr. López Serrot. — Pido la palabra para proponer un agregado al artículo 83.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Serrot. — La parte final de este artículo dice: «Tampoco podrá efectuarse en este lapso cambio que implique disminución de categoría.» Entiendo que falta establecer la penalidad en que se incurre en el caso de realizar el hecho que se prevé.

Sr. Visca. — Está en el artículo 78.

Sr. López Serrot. — Por eso propongo este agregado: «En caso de producirse, podrá ser considerado como despido injustificado.»

Sr. Albrieu. — En un artículo anterior de este estatuto se dice que sus cláusulas deben interpretarse de acuerdo a la ley 11.729, y a su respecto ha sido establecido por la jurisprudencia que la disminución de categoría implica despido injustificado, con derecho a la indemnización.

Sr. López Serrot. — Está incurriendo en un error el señor presidente de la comisión. La ley 11.729 no establece como causa de despido la modificación de categoría, sino la reducción de remuneración.

Sr. Albrieu. — Me he referido a la interpretación jurisprudencial.

Sr. Camus. — La jurisprudencia uniforme así lo ha interpretado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital, que la comisión no acepta.

—Resulta afirmativa de 47 votos; votan 91 señores diputados.

Sr. Visca. — Pido que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a rectificar la votación.

Sr. Frondizi. — Que quede constancia que la minoría acepta.

—Rectificada la votación, resulta negativa de 61 votos; votan 92 señores diputados.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — La comisión ha propuesto como artículo nuevo y como disposición transitoria, el siguiente: «Artículo 84. — En aquellas localidades del interior del país donde hayan sido fijadas oportunamente las calificaciones de empresas y determinado los sueldos básicos por las comisiones paritarias, se procederá a reajustar directamente dichas asignaciones aumentándolas automáticamente en un 40 por ciento.»

—Sin observación, se da por aprobado.

—El artículo 85 del nuevo estatuto es de forma.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — El artículo 3º del despacho de la comisión es de forma.

Sr. Presidente (Guardo). — Queda sancionado. (Aplausos.)

4

APLICACION DE ESCALAFONES

(Orden del día número 195)

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto

de ley del Poder Ejecutivo sobre crédito extraordinario hasta la suma de doce millones de pesos moneda nacional (\$ 12.000.000 m/n.), destinado a atender durante el corriente año el costo de la aplicación de los escalafones para el personal de empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado; y, por las razones que se dan en el informe adjunto, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Abrese un crédito extraordinario hasta la suma de doce millones de pesos moneda nacional (\$ 12.000.000 m/n.), destinado a atender durante el corriente año, el costo de la aplicación de los escalafones para el personal de empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado y con cargo a rentas generales

Art. 2º — La utilización del crédito que se autoriza por el artículo anterior, estará supeeditada a las necesidades reales de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado, emergentes de la aplicación de los escalafones, y en la suma que no pueda ser atendida con los recursos propios de la citada repartición.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, 15 de noviembre de 1946.

Juan Ramón Degreef. — Hernán S. Fernández. — Rosendo Allub. — Antonio J. Benítez. — Raúl Bustos Fierro. — Héctor J. Campora. — Armando Casas Nobleza. — Angel S. Mariategui. — Reynaldo A. Pastor. — Manuel Sarmiento. — Celestino Valdez.

En disidencia parcial:

Modificar el artículo 1º, aumentar el crédito a 18.000.000 pesos, y fijar como fecha de partida de la aplicación del escalafón el 1º de julio de 1946.

Emilio Donato del Carril. — Arturo Frondizi. — Sidney Nicolás Rubino. — Antonio Sobral. — Edmundo Leopoldo Zara.

INFORME

Para ilustración de la Honorable Cámara y como mejor informe escrito —que ampliaré oralmente— del proyecto de ley que ha despachado la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se transcriben a continuación diversos cuadros explicativos suministrados por la Administración General de los Ferrocarriles del Estado, y que demuestran por vía comparativa: